

I. HEGEMONÍA MILITAR, ESTADO Y DOMINACIÓN SOCIAL

ALAIN ROUQUIÉ*

Todo se ha dicho ya sobre el "caso" argentino. Se habló de enigma, de paradoja. Uno de los países mejor dotados del continente sólo evoca hoy día inestabilidad, violencia, dictadura por un lado y por el otro una persistente crisis económica que lo deja atrás de varios de sus vecinos en la vertiginosa carrera al crecimiento. Sin embargo las imágenes de un pasado esplendoroso y reciente se imponen y nos hacen dudar en encasillar a la "Gran República del Sur" entre los países subdesarrollados. Por largo tiempo en la imaginación popular europea, lo mismo que para sus emprendedores ciudadanos, la Argentina fue tierra de porvenir y de indefinidas oportunidades. Pero en un poco más de ciento cincuenta años de vida independiente la Argentina después de medio siglo de euforia ha experimentado, según algunos observadores, "cincuenta años de decadencia",¹ o cuando menos cincuenta años de vida difícil y de futuro incierto.

Desde 1930, fecha en que se abrió para el país la era militar, los generales que se apoderan periódica y reiteradamente de la Casa Rosada prometen al país "un destino de grandeza". Esta retórica propositoria no es sólo propia del mesianismo castrense ni destinada a halagar a los desanimados ciudadanos sino que corresponde a expectativas con bases concretas. Pertenciente durante la colonia a la "periferia pobre del espacio peruano"; la Argentina tomó su revancha en el siglo XIX y apareció con razón a principios de siglo entre los países más ricos del mundo. País templado, poblado por inmigrantes europeos —y sin problemas de integración nacional—, con extensas llanuras de suelos ricos, profundos y equilibrados, aptos, por lo mismo en la inmensa pampa húmeda, lo mismo para la agricultura que para la ganadería, y presentando una disponibilidad de tierras fértiles poco frecuente en América del Sur, la Argentina, país nuevo, parecía destinado a rivalizar nada menos que con la gran nación norteamericana y a constituirse en el verdadero polo latino del Nuevo Mundo. Se-

* Sociólogo francés, Centre d'Etudes et de Recherches Internationales, París.
¹ Según el reciente ensayo de Raúl Alfonsín, *La cuestión argentina*. Buenos Aires, 1980, p. 9.
² Waldo Ansaldi, *Notas sobre la formación de la burguesía argentina, 1760-1780*. Lima, 1978, multigr. p. 9.

Rouquié

4/1171 22 cop

1

32

gún todos los indicadores la sociedad argentina presenta hasta hoy rasgos de evidente modernidad. No sólo su *per cápita* es aún el más elevado de América Latina (ahora junto con Venezuela, ascendido gracias al "boom" petrolero), sino que la amplitud de su clase media, su impresionante nivel cultural tanto por la alfabetización masiva cuanto por la calidad de sus élites intelectuales le da un lugar aparte en el continente. Lo que para algunos sigue siendo "un anexo de Europa en el hemisferio sur"³ superaba incluso recientemente bajo varios aspectos a los mismos países europeos e industrializados: Argentina tenía en 1929 más autos por 10 000 habitantes que Francia y en 1950, todavía en cifras relativas, más teléfonos y más médicos que este país. En 1930 su producto per cápita superaba el de Japón e Italia. Sus índices de mortalidad y su nivel sanitario excepcional dejaban atrás a la mayoría de las sociedades de Europa mediterránea aún en los años sesenta. X. F. P. 1977, p. 137.

Esta modernidad social es el telón de fondo de una crisis a la vez global y específica. Esta crisis generalizada de la sociedad argentina se manifiesta de manera espectacular en el campo político y presenta síntomas recurrentes en lo económico. La inestabilidad política y la persistente hegemonía del poder militar desde 1930 forman las dos caras de la vida pública. 1930, 1943, 1955, 1962, 1966, 1976 representan las fechas de derrocamiento de gobiernos civiles, más o menos correctamente elegidos —salvo el presidente conservador depuesto en 1943—, por golpes de las fuerzas armadas. Y eso que dejamos de lado las revoluciones palaciegas que de 1943 a 1970 jalonan la propia precariedad de los gobiernos militares.

Por otra parte la hegemonía militar ha adoptado modalidades muy variadas que no excluyen los gobiernos civiles y de apariencias legales. De 1930 hasta 1980 ningún presidente fue libremente elegido sin condicionamiento ni veto militar dentro de un proceso normal de sucesión. Si bien el mandato constitucional es de seis años, el promedio de las presidencias entre 1930 y 1971 fue de dos años y diez meses. La afición de los militares —y de los generales en particular— por el sillón de Rivadavia merece señalarse: de dieciséis presidentes que tuvo el país entre 1930 y 1973, once eran militares. Sólo dos presidentes electos permanecieron en la Casa Rosada hasta el término de su mandato: ambos eran generales y seguramente no hubieran llegado nunca a ser elegidos presidente sin la oportunidad que les concedió un golpe de Estado en que participaron activamente. Así es como el general Justo llega a la presidencia en 1932 encabezando una coalición conservadora después del derrocamiento del plebiscitado presidente Yrigoyen por el golpe del 6 de septiembre de 1930 en que tuvo

³ John Gunther, *L'Amérique Latine*, Paris, 1943, p. 48.

un papel destacado. De igual modo el general Perón es elegido presidente por primera vez en forma regular en febrero de 1946 con fuerte apoyo de los sindicatos obreros después de ocupar la vicepresidencia de un gobierno de facto del que figuraba como el hombre fuerte y que toma el poder con la "Revolución" del 4 de junio de 1949.

— Cabe notar, para valorar mejor la mudanza política y económica que se verifica en 1930, que esta inestabilidad crónica que se destaca hoy día era anteriormente desconocida. De 1880 hasta 1930, mientras varios países vecinos padecen una vida pública convulsiva y a veces sangrienta, la Argentina de "los ganados y de las mieses" ofrece la imagen segura de instituciones sólidas de funcionamiento regular. Entre 1862 y 1930 si bien el país conoció diversas vicisitudes políticas e intentos de putsch, ningún presidente fue llevado al poder por una sublevación armada y la sucesión presidencial se efectuó conforme lo dictaba la Constitución de 1853.

— Si la gran depresión abre un período de intervenciones reiteradas del poder militar que dura hasta nuestros días, también coincide con un estancamiento cíclico de la economía nacional —mal ocultado por el repunte de la guerra e inmediata posguerra— dentro de una tendencia larga a una notable declinación relativa del dinamismo nacional. Argentina abandona hacia finales de los años veinte el universo de curvas ascendentes que caracteriza la euforia del "progreso ininterumpido" que vivía a principios de siglo. El crecimiento vertiginoso del comercio exterior atestigua entonces el éxito de la integración del país al mercado mundial como proveedor de carne y de trigo. De 1869 hasta 1914 su comercio internacional decuplica su valor, sus exportaciones casi se triplican en 1900-1910. Así Argentina ocupa entonces el segundo puesto detrás de Estados Unidos en el hemisferio occidental para el comercio exterior y se sitúa tercero en el mundo delante de cuarenta países (incluyendo Alemania y Gran Bretaña) por el valor per cápita de sus importaciones.

Pero mientras sus competidores internacionales en la producción de trigo o de maíz (Estados Unidos, Canadá), de lana o de carne (Australia, Nueva Zelandia), aumentan su participación en el comercio mundial, Argentina retrocede y ve su posición deteriorarse. Antes de la guerra cubría el 20% de la demanda mundial de maíz y sólo 9% en 1950-1954; su participación en el comercio de la carne cae de 40% a 19% después de 1950.⁴ Entre 1945 y 1966 el crecimiento del *per cápita* presenta cifras negativas durante seis años, el ingreso per cápita bajó durante 9 años. Y a pesar de los buenos años de la posguerra, da la impresión que el crecimiento económico se ha detenido. Éste, que se

⁴ Organización de Naciones Unidas, *cepa, Análisis y proyecciones del desarrollo económico: I: El desarrollo económico de la Argentina*, Parte I: *Los problemas y perspectivas del crecimiento económico argentino*, México, 1959, p. 13.

situaba por encima del 5% anual antes de 1929, alcanza sólo 2,5% entre 1925-1929 y 1962, con una tasa per cápita vecina de cero: 0,6% exactamente.⁵ Si bien los resultados económicos entre 1960 y 1975 son más alentadores, no corresponden en nada a los inmensos recursos del país y están entrecortados por crisis cíclicas. Esta ausencia de dinamismo no es por cierto un fenómeno continental, lo que destaca aún más su significado. Por su crecimiento industrial como por su crecimiento agrícola y la tasa de desarrollo de sus exportaciones, Argentina se encuentra de 1950 hasta hoy por debajo de sus pujantes rivales, Brasil y México, para el liderazgo continental. Por ejemplo las exportaciones de bienes y servicios de estos dos últimos países crecieron respectivamente de 6,4% y 5,6% de 1959 a 1969 mientras la cifra argentina sólo alcanzaba 3,7%, siendo la media continental 4,7%.⁶ Así es como las exportaciones de la Argentina, que en 1938 representaban el 30% aproximadamente de las exportaciones de los 11 países latinoamericanos que más tarde formaron la ALALC, en 1977 apenas rebasa un 13%. Brasil experimentaba en el mismo período la trayectoria inversa, subiendo de un 20% a casi un 30% actualmente.

La convergencia de estas dos series de datos a la que no queremos dar por el momento ningún valor explicativo, ha sido tal vez oculta por los acontecimientos recientes. Las características del golpe del 24 de marzo de 1976 y del "proceso de reorganización nacional" que lo siguió, han contribuido por su semejanza con las situaciones chilenas o uruguayas a trivializar la evolución argentina. Tanto más cuando que por primera vez la especificidad nacional casi siempre a rastros de las tendencias continentales —la democracia es restablecida en 1973 en Buenos Aires cuando está a punto de desaparecer en Santiago y Montevideo por ejemplo— se diluye. Argentina se "latinoamericaniza". Y por lo tanto se le puede aplicar las sendas explicaciones continentales o mundiales de moda para explicar la ola del "militarismo de mercado" que asola el cono sur a mediados de los años setenta. Pero las similitudes de orientaciones económicas y de estilo represivo no bastan. La destrucción del orden democrático de Chile se da en una coyuntura excepcional de amenazas al *status quo* y de amago de cambio del modo de producción vigente. La contrarrevolución militar es la respuesta a un proyecto revolucionario y hace explotar un sistema político representativo de impresionante continuidad. En la Argentina se trata al contrario de un proceso reiterado y más o menos previsible dentro de una ininterrumpida sucesión en el poder de civiles y militares. Por varias razones que veremos más adelante el nivel de violencia represiva y de cambio socioeconómico difiere bastante de las experiencias anteriores pero se inscribe en el mismo contexto institucional.

Para entender la Argentina de hoy es preciso recordar que la dominación militar no es ni nueva ni coyuntural. Se inicia en 1930 y ya cumplió medio siglo. Tiene rasgos propios dentro del continente, entre otras cosas por su semiautonomización. Por eso 1976 no aparece como el cataclismo autoritario que sorprendió tres años antes a chilenos y uruguayos sino como una recaída, una nueva fase del ciclo sin fin con la retórica de siempre y las mismas aparentes finalidades, no sólo el "destino de grandeza" de los discursos sino los objetivos producidos: "no los plazos" de la democracia fuerte y estable y del aparato productivo eficiente y competitivo que permitirán superar definitivamente el estancamiento y la alternancia cívico-militar.

Es obvio que la pregunta que se plantea a lo largo de casi todo este medio siglo, no por afán reduccionista sino porque la coincidencia de los dos fenómenos la hace ineludible, es la relación entre el cambio de los dos fenómenos la crisis política, aceptando de antemano el carácter reversible de dicha relación. Para echar alguna luz sin un *a priori* contraproducente sobre este problema, nos parece imprescindible empezar por el análisis del funcionamiento del sistema político real, es decir ver cómo y a través de qué mecanismos se manifiesta y prolongada hegemonía del poder militar frente a las expectativas y a los comportamientos de los demás actores. Lo que nos conduciría a examinar la realidad de los actores sociales y su vinculación con el aparato productivo en la situación de alta modernización que conoce el país, para poder así, quizá, señalar mejor las causas de la violencia política y las perspectivas actuales de la evolución nacional.

SOBERANÍA MILITAR Y FERRO RETORNO

Desde el comienzo de la era militar se pueden clasificar a los gobiernos civiles en tres categorías que se agregan a las dos variedades de regímenes militares, el "provisional" o *carriadero* (1955) a veces disfrazado de civil (1962) y el "constituyente" (1966, 1976). Estos tres tipos de gobiernos civiles serían: los que se apoyan sobre las fuerzas armadas (como el régimen presidido por el general Perón hasta 1951-1952), los que gobiernan neutralizando el ejercicio por tener cierta legitimidad militar propia (tal fue el caso de la Concordancia del general Justo en 1932-1938), y todos los demás cuyo destino es ser derrocado por los militares. De hecho al examinar la evolución poli-

⁵ Carlos F. Díaz Alejandro, *Essays on the economic history of the Argentine Republic*, New Haven, 1970, pp. 351-352.

⁶ Organización de Naciones Unidas, *CEPAL, Estudio Económico de América Latina*, Nueva York, 1971, cuadro 57, p. 83.

tica argentina de este medio siglo, aparece una constante sorprendente: a pesar del bajo nivel de radicalización o de polarización programática y de un consenso bastante amplio en el campo de las estructuras económicas para todas las fuerzas políticas y sociales la victoria sobre el adversario vale más que la salvaguardia de las instituciones. Sin embargo, nunca en la historia argentina contemporánea un golpe de Estado ha tenido por objetivo derrocar a un gobierno que amenazara directamente el *status quo* social y que tratara de realizar importantes transformaciones estructurales. La Argentina nunca tuvo un Allende o un programa de gobierno parecido al de la Unidad Popular chilena, con miras a instaurar el socialismo. Sin embargo todos los partidos sucesivamente desde que se encuentran en la oposición complotan, halagan a los militares putschistas, combaten los esfuerzos constitucionales para preservar la frágil legalidad. Este clima de revancha es uno de los componentes del continuismo militar más difícil de interpretar. Pero es prueba de la estrecha vinculación entre militares y políticos más allá de las reglas del juego representativo.

Legitimidad militar y golpe de Estado permanente

Es verdad que la evolución de las modalidades de intervención militar parecen ir en el sentido de una mayor publicidad conforme la dominación militar se va institucionalizando. Por un lado la participación de los partidos populares mayoritarios con el recurso de la "democracia restringida" y por el otro las alianzas político-militares impiden que los principios constitucionales liberales tengan relación con la naturaleza del poder real y contribuyen acumulativamente a descreditar el sistema político legal desestabilizándolo de modo permanente.

El general Justo, elegido presidente en 1932, fue el primer responsable de la instauración de un régimen representativo limitado después de la fase de "democracia ampliada" que permitió al Partido Radical predominar entre 1916 y 1930 en el escenario político. Su elección se debe tanto a la prohibición de los radicales cuanto al fraude electoral más descarado, que algunos conservadores no dudaron en llamar "patriótico" porque permitía asegurar el poder de las élites tradicionales restauradas en 1930 y quitándolo en estos tiempos de "incertidumbre" de las manos inexpertas de la "plebe" radical (que nunca fue ni plebe ni muy radicalizada). Mientras los radicales son víctimas de las proscripciones o del fraude de 1930 hasta 1943, el peronismo, también mayoritario en 1946 y en 1951 en las elecciones presidenciales, resulta proscrito a raíz de la "Revolución Libertadora" de 1955 que derroca al presidente Perón. Hasta 1973 toda la

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

vida pública gira en torno al insoluble problema de la integración política sin riesgo de los electores peronistas. La democracia limitada y minoritaria entraña naturalmente la inestabilidad de los gobernantes legales pero carentes de legitimidad popular; y los golpes sucesivos (1962 y 1966) tienen siempre entre sus causas manifestaciones voluntad militar de cortar el camino del poder a "la chusma" justicialista.

El exilio de perón y la interdicción de toda expresión política para sus partidarios después de 1955 hace aún más complejas las ecuaciones político-militares y más frágil el delicado equilibrio de las instituciones representativas en crisis. Todos los partidos se dividen acerca de la cuestión peronista. Radicales, conservadores y socialistas padecen escisiones. Las fuerzas armadas se enfrentan sobre la actitud que se debe adoptar con relación a los peronistas. Así se establecen afinidades duraderas entre civiles y militares y el golpe pasa a ser el mecanismo normal de devolución del poder.¹ En nombre del pueblo y de la justicia social para unos, de las libertades y de la democracia para otros, neopopulistas y ultraliberales agrupan todas las fuerzas disponibles para enfrentarse sin piedad y fuera de toda legalidad constitucional. Este golpismo del que son víctimas sucesivamente los alternativos y precarios vencedores del sufragio universal, se complica aún más por los cambios de frente interno de las alianzas y de las tendencias militares.

En 1958 el radical disidente y desarrollista Arturo Frondizi es electo presidente con el apoyo masivo de los votos peronistas (por orden del mismo Perón, "dictador prófugo" en la jerga militar de la época, que quería así mostrar su fuerza y su capacidad de enfrentar indirectamente a un adversario que debía eliminarlo definitivamente de la vida política). Las fuerzas armadas que derrocaron a Perón están lideradas entonces por los sectores más activistas del antipopulismo (los llamados *gorilas*). El estado mayor estima por consiguiente que el nuevo presidente debe su investidura a una alianza "antidemocrática" y espuria y que gracias a ella frustró la victoria del candidato oficial de las fuerzas armadas* que pertenecía a la tendencia liberal del radicalismo (los radicales del pueblo). Por supuesto que este último partido, vencido electoralmente en condiciones tan discutibles, no va a ahorrarse nada al nuevo ocupante de la Casa Rosada y desde el día de la toma de poder, el golpe en sus dos vertientes civil y militar está en marcha. Sólo por una habilidad, que algunos calificaron de maquiavélica, Frondizi logrará mantenerse cuatro años en el poder. La coa-

¹ Véase Alain Rouquié, *Power militaire et société politique en République Argentine*, París, 1978, capítulo 10.

* Utilizamos indistintamente "ejército" o "fuerzas armadas" salvo cuando aludimos a las distintas armas explícitamente.

ción de los radicales del pueblo y de los militares antiperonistas le va a derrocar no obstante en 1962.

La situación es casi exactamente simétrica en 1968, cuando el radical del pueblo Arturo Illia es elegido por una minoría de votantes, siendo el peronismo siempre proscrito. Ahora el sector militar dominante es más *desarrollista* que *gorria*. Y así frondistas y militares antirradicales van a programar el golpe de Estado menos violento y mejor planeado de la historia argentina que termina en 1966 con la presidencia de los radicales del pueblo. Esta intervención militar organizada públicamente con un año de antelación fue prolijamente organizada con intensas campañas de propaganda para desprestigiar el gobierno legal ante la opinión pública. Semanarios *golpistas* y usinas de acción psicológica rivalizaron para preparar el terreno según los métodos más modernos de Madison Avenue. La ecuación *desarrollo/técnica/militares* se opone en el discurso golpista a la asimilación machacada entre partidos democráticos, arcasismo e inmovilismo: el tradicional golpe de Estado aparece casi como una novedad a orillas del Plata. Mientras los militares "arcángelos blindados" son exaltados como héroes de la epopeya tecnológica y de la grandeza nacional, los radicales del pueblo se ven asimilados a la modorra pueblerina, y a la siesta provinciana, que se simbolizaba en la prensa humorística y orientada con torrugos y palomas...

Así los presidentes minoritarios acceden al poder bajo la vigilancia suspicaz de un ejército dividido en tendencias cuyas afinidades civiles saltan a la vista. La no coincidencia entre la orientación dominante en las fuerzas armadas y la del poder civil es otra fuente de inestabilidad permanente. Las fuerzas armadas no interviene en modo de utilitaria radio o en condiciones excepcionales sino como "partido militar" y para hacer triunfar la línea política que la opinión pública u otro sector militar rechazaron. Esta lógica disgregadora se suaviza o se agrava con los mecanismos propios de la organización militar, como por ejemplo la búsqueda de compromisos para mantener la unidad interna. De todas formas el poder civil puede intentar esquivar la tutela militar, pero desde el origen tiene los días contados y mientras tanto se ve reducido a la impotencia. A todo esto se añade entre 1955 y 1973 la estrategia indirecta de Perón y de los sindicatos peronistas que utilizan todo tipo de provocación para debilitar el gobierno y empujar las fuerzas armadas a intervenir. Atizando así todas las agitaciones y todas las oposiciones, Perón simboliza la contestación total del sistema posperonista y demuestra que el país no se puede gobernar sin su participación.

LA FRAGILIDAD DEL PODER MILITAR O UNA "VICTORIOSA DERROTA"

"Revolución argentina" y "Gran Acuerdo Nacional"

El gobierno militar que sucede al presidente Illia en 1966 no se considera como provisional. Pertenace a la categoría de las dictaduras constituyentes. La "Revolución argentina" que preside el general Onganía pretende realizar grandes transformaciones económicas y sociales que permitirán una redistribución de las fuerzas políticas. Para esta modernización que favorece las grandes sociedades industriales nacionales y sobre todo extranjeras el general-presidente necesita tiempo, alrededor de diez años se dice en el entorno presidencial que abunda en proyectos neocorporatistas. Pero la sublevación en 1969 de varias capitales del interior arruina definitivamente un año más tarde estos sueños antipolíticos. Después del interregno del general Levingston que intenta lanzar una política nacional-élite por falta de base social, el general Lanusse asume la presidencia para buscar una salida honorable del *impasse* donde agoniza una "revolución militar" sin aliento ni porvenir.

El nuevo presidente de las fuerzas armadas, consciente como la mayoría de los militares de la situación del país presa de peligrosas tensiones desde el "cordobazo" de 1969, va a intentar preparar en buenas condiciones la retirada de las fuerzas armadas. Para tal fin las nuevas autoridades políticas rechazan lo que llaman un "salto al vacío", es decir la vuelta a la normalidad institucional sin control ni tutela militar. Y por lo tanto se proponen subordinar la consulta electoral y el llamamiento a elecciones a la firma de un "Gran Acuerdo Nacional" de todos los grupos políticos auspiciado por las fuerzas armadas. Un consenso democrático de todos los argentinos (figurado en la profusa propaganda oficial por un equipo de fútbol), la coincidencia política negociada —o impuesta por el gobierno— entre los distantes grupos antagonicos podrían asegurar según ellos la estabilidad de las instituciones así restauradas. La aceptación del Gran Acuerdo (GAV) permitiría formalizar en buenas condiciones la retirada militar; sería como la aprobación civil del cumplimiento de su delicada misión. Además un acuerdo "patriótico" sobre una candidatura presidencial común agrardaría quizás al estado mayor y por supuesto aplacaría en las filas militares los sentimientos de frustración. Algunos no descartan inclusive la perspectiva de ver electo a un militar que, en cuanto presidente de transición y de pacificación nacional, aseguraría en las mejores condiciones el proceso normalizador.

Sin embargo, el auge de la violencia revolucionaria —subproducto del ahogo político de la dictadura tecnocrático-militar— alentada por

Perón, exiliado en Madrid, hace temer a los militares algún multibinario "17 de octubre", a escala nacional, un "Argentinazo" nacido de la convergencia del descontento popular y de la guerrilla. Y el propio Perón se ofrece entonces para ahorrar al país el terremoto social que lo amenaza. Los responsables de las fuerzas armadas que se comprometen a organizar elecciones sin ninguna clase de proscripti-ones y de respetar el resultado del escrutinio del 11 de marzo de 1973 ya han perdido la iniciativa. No habrá candidatos oficiales. Todos los intentos para imponer la aprobación por las fuerzas políticas de un amplio acuerdo capaz de orientar el proceso electoral quedan sin respuesta. El proyecto de constitucionalización de la participación política de los militares cae otra vez en el olvido. Sólo una oportuna cláusula de residencia impide que Perón presente su candidatura para la presidencia. Éste se contenta con designar a su delegado personal como candidato del peronismo que va a tomar parte por primera vez desde 1955 en elecciones presidenciales libres de proscriptión.

La movilización impresionante de las turbulentas juventudes peronistas que amenazan seguir a los Montoneros en la lucha armada si las elecciones no se verifican (o no dan la victoria a sus candidatos) no permite ya a los militares dar marcha atrás. El eslogan "Cámpora al gobierno, Perón al poder" ridiculiza la precaria cláusula proscriptiva impuesta por los generales. La reforma de la ley electoral introduciendo el sistema mayoritario de dos vueltas inspirado del ballottage a la francesa constituye tan sólo un seguro irrisorio contra el peronismo. Tan es así que los militares declaran a Cámpora electo con sólo el 49,5% de los votos para evitar una segunda y tumultuosa vuelta que ampliará aún más la victoria justicialista y la desautorización del poder militar.

Llama en efecto la atención en los resultados de las elecciones de marzo de 1973 la amplitud de la derrota del "partido militar", con sus grandes designios y sus pequeñas maniobras. A pesar de una costosa campaña antiperonista que avasalló la prensa nacional durante las semanas que precedieron la consulta y a pesar de siete años de una propaganda oficial denunciando machaconamente la incapacidad congénita de los partidos tradicionales, las dos grandes familias políticas (los peronistas con algunos socios menores en el Frente Justicialista de Liberación Nacional —FREJULI— y los radicales de Unión Cívica Radical), reciben 70% de los votos. Un militar ex secretario de la Junta y candidato medio oficioso no alcanza el 3% de los sufragios. El conjunto de los candidatos de la continuidad, que se reclamaban en alguna medida del régimen "de facto", no superan el 18% de los votos.

A través del voto de protesta⁸ que hace triunfar los candidatos justicialistas, los militares pudieron medir su fracaso y la impopularidad de siete años de incertidumbre autoritaria. El general Lanusse y los responsables de las fuerzas armadas reconocen apresuradamente los resultados electorales. La derrota de los militares sólo acababa de empezar. Una ola de terrorismo sacude el país durante el delicado interregno, cobrando las vidas de varios militares mientras el presidente electo se niega a condenar explícitamente las organizaciones guerrilleras. El 25 de mayo, día de la toma de poder y de la fiesta patria, los guerrilleros desfilan con sus banderas en las calles de la capital federal y el desfile militar tradicional se cancela por temor a los incidentes. Las "juventudes peronistas" cantan "se van, se van y nunca volverán" mientras Allende y Dorticós asisten a la entrega a Cámpora de la banda presidencial en la Casa Rosada. En un clima casi insurreccional para unos, de intenso júbilo popular para otros, las "juventudes" imponen a las nuevas autoridades la medida más temida de los militares: una amnistía general. Permite la liberación de todos los prisioneros políticos. Los militares parecen beber hasta el fondo la copa amarga de la derrota.

En el plano del gobierno el presidente Cámpora ha rechazado todas las condiciones presentadas por el estado mayor, en lo que toca a la participación institucional de las fuerzas armadas y a la selección de sus representantes y dirigentes. La designación como comandante en jefe del ejército del general Jorge Raúl Carragno, el más joven entre los generales de división que pertenece como el mismo Perón a la infantería, hace pasar a retiró ocho generales más antiguos y desca-beza la camarilla de la caballería que dominaba el ejército desde 1960. Aparentemente el plan Lanusse ha fracasado.

La "tendencia revolucionaria" del peronismo que lideró espectacularmente la campaña electoral parece a punto de ocupar puestos de responsabilidad en el poder. Militares, civiles moderados y clases propietarias ven con espanto a los ahora aceptables partidarios de la "patria peronista" desbordados por los inquietantes activistas de la "patria socialista". Además la izquierda peronista, considerándose marginada en la composición del gobierno supervisada por Perón en persona, se lanza en un movimiento de agitación en todas las direcciones frente al cual el "compañero Cámpora" resulta impotente.

El retorno a la Argentina en junio de 1973 del "líder" provoca enfrentamientos sangrientos en Ezeiza entre grupos armados que se reclaman de Perón. El ex presidente no oculta su voluntad de tomar en sus propias manos la dirección del Movimiento y del gobierno expul-

⁸ Véase nuestro estudio "Le vote péroniste en 1973", *Revue Française de Science Politique*, junio de 1974.

sando a los "infiltrados" de última hora. Los peronistas ortodoxos exigen su ascenso inmediato al poder y por consiguiente la renuncia del débil presidente Cámpora. Pero para eso existe una condición previa que el propio Perón no puede ni quiere pasar por alto: las fuerzas armadas deben aceptar que un ex general degradado, con considerandos ignominiosos, por un tribunal de honor, entre de nuevo en la Casa Rosada. Este obstáculo es levantado por los militares cuando en una visita histórica que señala la reconciliación solemne de Perón de las fuerzas armadas frente al peligro común, el comandante en jefe del ejército, en nombre de la fuerza, devuelve al presidente condenado su grado de teniente general, diecisiete años después.

Así las fuerzas armadas dieron su bendición a un golpe de palacio que puso abruptamente término a las convulsiones y las esperanzas de la presidencia Cámpora. La renuncia forzada de las autoridades elegidas por el pueblo el 11 de marzo parece a muchos argentinos como un "golpe de derechas" apenas disfrazado por la simbolización excepcional del hombre que durante dieciocho años ha simbolizado la causa popular contra las fuerzas armadas y las oligarquías. Sea lo que fuere, esta secuencia de acontecimientos muestra que a pesar de su aparatosa retirada las fuerzas armadas no están ausentes del terreno político. Y que el afianzamiento de las instituciones democráticas restauradas se valió de un golpe de fuerza al que no fueron del todo ajenos los militares. Otra vez Perón llegaba a la presidencia con el espaldarazo de sus pares.

Los gobiernos peronistas y la legitimidad militar (1973-1976)

Se equivocaría groseramente quien piense que la derrota de los militares en las elecciones de marzo de 1973 significa el alejamiento de las fuerzas armadas del escenario político. Lejos de encerrarse en sus "tarecas profesionales", los militares a pesar de sus recientes infortunios (o a causa de ellos) van a encontrarse directamente envueltos en las luchas intestinas de la agitada nebulosa peronista. Tan es así que las nuevas autoridades del ejército parecen si no querer participar en cuanto tales a la "revolución justicialista" anunciada por el general Perón, por lo menos desear que las instituciones militares no se alejen de la vida nacional. Es la actitud que el general Caragno llama "profesionalismo integrado" o "comprometido". Así vamos a ver a oficiales y jefes participar junto con las juventudes peronistas en operaciones de emergencia y de acción cívica frente a catástrofes naturales (Operación Dorrego) o a los Montoneros asistiendo al lado del estado mayor militar a conmemoraciones político-patrióticas. Esta

colaboración espectacular no es del agrado del sector sindical del peronismo, poderoso adversario de las juventudes revolucionarias. El propio Perón ve con suma preocupación semejante acercamiento. Por otra parte el nacionalismo populista del general Caragno toca un terreno sensible y privativo del creador de la "tercera posición". Cuando los senadores peronistas se oponen a las promociones al grado de general de brigada de cuatro coroneles, colaboradores directos del comandante del ejército, éste tiene que renunciar.

Bajo la dirección del general Anaya, nuevo comandante, el estado mayor adopta una actitud de "profesionalismo integral", con objeto de preservar al ejército de las luchas despiadadas que enfrentan a los peronistas entre sí. Por otra parte el general Perón, que no ha dudado en apartar de la dirección del ejército a un hombre nombrado por Cámpora para afianzar su autoridad, descabeza la dirección de la marina para designar como comandante de este baluarte del antiperonismo a un hombre de diálogo, hábil según múltiples opiniones para utilizar a todos los vientos a favor: al almirante Massera.

La muerte del general Perón el 1 de julio de 1974, después de menos de un año de gobierno, provoca un vacío político a la medida del personaje y del sistema de poder creado por él y para él. El país va a hundirse rápidamente en una crisis sin precedente. Frente a la señora Perón, vicepresidente sin experiencia ni capacidad política, por voluntad de su ilustre esposo, que asume constitucionalmente la presidencia, las fuerzas armadas acentúan su actitud de absoluta y visible prescindencia. La mayoría de los oficiales, cualesquiera hayan sido sus sentimientos respecto a esta segunda época del peronismo, desean evitar todo contacto con un régimen que se descompone rápidamente en todos los planos. Tanto más cuanto que algunos personajes poco recomendables frecuentan el círculo áulico rodeando al raspunitiano secretario y ministro López Rega.

Pero la señora Martínez de Perón y sus consuegreros parecen preocupados de obtener todo lo contrario: el compromiso militar en el apoyo al régimen cada vez más huérfano de base social. Así es como el general Anaya tiene que abandonar sus funciones en mayo de 1975 por haberse negado a poner el ejército al servicio del poder para contener la agitación social cada vez más fuerte en toda la extensión de la República. Es sustituido por el general Numa Laplane, quien considera un deber de las fuerzas armadas evitar, merced a un apoyo mili-

* Cf. "El caso de los cuatro coroneles", *La Nación* (Edición Internacional), 17 de diciembre de 1973. Entre los coroneles amigos de los Montoneros —pero que fueron asesinados— figuraba un futuro miembro del gobierno del general Videla. Véase también *Martín*, Montevideo, 30 de noviembre de 1973, sobre las conjeturas del general Caragno; véase su discurso en el Colegio Militar sobre "la defensa de la Constitución", *La Prensa*, 30 de mayo de 1973.

tar instricto, el dramático naufragio de un gobierno aislado. El nuevo comandante, por otra parte, pasó por compartir cierta identidad de vistas con el superministro López Rega. La búsqueda de la participación y de la legitimidad militar desencadena así una crisis militar aguda a partir de agosto de 1975, preludio a la caída del poder civil.

El nuevo comandante en jefe del ejército ha autorizado el nombramiento del coronel en actividad Vicente Damasco como ministro del Interior, comprometiendo así la táctica de neutralidad militar. Tanto más que los sindicatos peronistas aplauden ruidosamente este nuevo encuentro entre el pueblo y los militares mientras algunos no vacilan en hablar jubilosamente de la aparición de un nuevo "coronel de los trabajadores". Pero la historia no se repite ni siquiera en la Argentina. Todas las guarniciones del ejército están puestas en estado de alerta para exigir no sólo el pasaje a situación de retiro del ministro Damasco, sino la renuncia de Laplane. Los sublevados ganaron fácilmente: el general Videla, defensor intransigente de la no participación al poder político, asume el puesto de comandante en jefe.

La prescendencia ostensible y táctica de las fuerzas armadas va a revelarse pronto sumamente rentable para sus protagonistas dados los mecanismos del sistema político real y las expectativas de los actores. Merced a una actitud de profesionalismo respetuoso y exigente que no ha empañado el fracasado *putsch* de los aviadores en diciembre de 1975, los militares llegaron a hacer olvidar su impopularidad de siete años de gobierno de las fuerzas armadas y su responsabilidad institucional en la aparición de la violencia política. Las fuerzas armadas aparecieron así ante la opinión pública como sumamente deseosas, a pesar de las provocaciones del terrorismo de izquierda y de los cueros de siena de los sectores dominantes, de renasar lo más posible su vuelta al escenario político, permitiendo así que los partidos encuentren una solución legal al proceso de degradación del régimen o demuestren su absoluta falencia. De hecho "la paciencia de los militares" y el "golpe de Estado a regañadientes" fueron parte de un plan de acción psicológico sumamente eficaz. El estado mayor espera que el poder le caiga en las manos como una fruta madura cuando la opinión pública (inclusive las clases populares) resignada y amedrentada consienta a las fuerzas armadas un nuevo crédito de confianza frente a la falta de cualquier otra alternativa visible.

La negativa de los partidos a exonerar constitucionalmente a la presidenta que frente a la crisis económica, al terrorismo tanto oficial como izquierdista y a las divisiones de su propio partido ha demostrado sobradamente su patética incapacidad, prepara el terreno para la intervención. El "constitucionalismo" de las fuerzas armadas aparece así como una de las formas más sutiles del intervencionismo. En efecto, cuando el presunto convidado de piedra se pone en marcha

sólo faltan algunos meses para que las elecciones generales anticipadas permitan los cambios políticos necesarios para una solución pacífica, y la guerrilla, que ha sufrido al final de 1975, al atacar la guarnición de Monte Chingolo en la provincia de Buenos Aires, un fuerte revés, aparece, y en cuanto amenaza militar, bajo control.

Además los planes golpistas nada improvisados que proveían una fuerte resistencia de las masas peronistas y tenían por ende elaborado un dispositivo represivo de inusitada violencia, se encuentran esta vez también frente al vacío. Los sindicatos peronistas se muestran incapaces de movilizar sus tropas para defender "el gobierno" de los trabajadores y a los herederos del general Perón. Los partidos descalificados por su inercia se sienten al contrario aliviados. Las instituciones militares exorcizadas en 1973 no habían sufrido tal derrota. Al fin y al cabo el plan Lanusse aparece retrospectivamente como una mera retirada estratégica y la forma más drástica de desprecionar al país.

Algunas constantes del poder militar en la Argentina.

Esta rápida retrospectiva histórica focalizando una situación límite de aparente y aparatosa desmilitarización del sistema político permite visualizar ciertos mecanismos a través de los cuales se materializa la continuidad del poder militar casi institucionalizado. Salta a la vista que las fuerzas armadas constituyen no sólo como se ha dicho a veces un factor de poder sino un protagonista permanente y decisivo de las contiendas políticas. No se presentan como un grupo de presión o de interés corporativo sino como el eje de la vida nacional.

Este protagonismo perpetuo hace indispensable una observación acerca del tipo de instituciones militares. Se podría pensar que a diferencia de los países en que las fuerzas armadas hacen las veces de *ultima ratio* del orden establecido o de poder de reserva en condiciones excepcionales, la politización permanente de las fuerzas armadas argentinas procede simplemente de la poca consistencia institucional de las mismas. Dicho de otro modo que el aparato militar está fuertemente penetrado por la sociedad global y que la distinción entre civiles y militares cuenta poco o como en los viejos ejércitos caudillescos está fuertemente obliterado. Como bien se sabe esto no es así en la Argentina. El ejército modernizado y "profesionalizado" a principios de siglo según el modelo prusiano pertenece más al Estado que a la sociedad.¹⁶ Merced a una serie de recursos político-institucionales

¹⁶ Por toda una serie de razones que no podemos desenvolver aquí (socialización, reclutamiento, estilo de vida, valores, etc.). Véase el capítulo 2 de nuestro libro ya citado: *Pouvoir militaire et société politique...* op. cit. Y para una tipología de las fuerzas ar-

propios, las fuerzas armadas gozan de una fuerte capacidad de autonomía tanto con relación a los transitorios gobernantes como frente a los distintos grupos sociales y políticos. La poca penetración de la sociedad en el ejército se percibe por ejemplo a través de mecanismos y comportamientos específicos. Las promociones se dan según criterios eminentemente meritocráticos y generalmente libres de toda interferencia civil externa y los oficiales argentinos se muestran hostiles para con los partidos políticos a los que muy pocos —aun en situación de retiro— pertenecen. Una vez en el poder los militares argentinos se han negado siempre, a diferencia de otros ejércitos, a crear un "partido de militares";¹¹ las veleidades pasadas de estructurar un "movimiento de opinión" *ad hoc* para dar base social civil a las dictaduras castrenses nunca prosperaron. Las líneas de división de la sociedad militar pueden a menudo coincidir con las orientaciones de los partidos, pero no entrañan ninguna confusión. En resumen, la sociedad militar argentina constituye una comunidad institucional relativamente cerrada y aislada aun cuando está íntimamente mezclada a todas y cada una de las vicisitudes políticas desde 1980 y cumple funciones económicas importantes en los sectores claves de la economía, como en los casos de la siderurgia y la química pasada. La dirección General de Fabricaciones Militares creada a principios de la segunda guerra mundial controla hoy la casi totalidad de las empresas públicas o mixtas en el ramo industrial. Estas responsabilidades acentúan la identificación con el Estado de su rama militar y facilitan tanto la usurpación militarista recurrente como la "inversión proletaria" que la permite.

Las relaciones civiles-militares obedecen en la Argentina a representaciones y expectativas muy distintas de las que prevalecen en los sistemas constitucionales pluralistas estables. Las reglas del juego corresponden al desarrollo lógico de los valores pretorianos que plasman la vida política nacional y pueden sintetizarse en los puntos siguientes:

1) Las fuerzas armadas constituyen un actor legítimo del sistema. Las violaciones por el ejército de la subordinación constitucional no provocan nunca la unión sagrada de las fuerzas civiles para la defensa de las instituciones. La amenaza militar, lejos de callar los conflictos, los agudiza, los torna incontrolables por la vía parlamentaria. La oposición generalmente se brinda para apoyar a los militares facio-

madras según su menor o mayor grado de vinculación con la sociedad. ver Alain Rouquié (ed.), *La politique de Mars, les processus politiques dans les partis militaires*, Paris, 1981, capítulo 1.

¹¹ Como por ejemplo el "Partido de conciliación nacional" salvadoreño, en tierra medida la arena brasileña y en otros continentes la Unión Socialista Árabe de Nasser. Cf. Alain Rouquié, *La politique de Mars, op. cit.*, pp. 20-22.

sos contra los transitorios ocupantes del gobierno. Los vencidos del sufragio universal, considerándose más legítimos que sus adversarios, se apresian para tomar su revancha gracias a las fuerzas castrenses. Nadie se llama a engaño ya que cada partido de gobierno ha tenido su hora y su turno de víctima y de beneficiario del poder militar.

El pronunciamiento del general Urburu en 1980 permite la restauración de las fuerzas conservadoras desplazadas en 1916 por los radicales, paladines del sufragio universal. Pero el mismo partido radical, defensor por naturaleza y vocación de las instituciones democráticas, toma su revancha discretamente en 1943 cuando el ejército derroca al presidente conservador Castillo. La Unión Cívica Radical que en un primer tiempo —muy breve por cierto— festeja a los militares golpistas, no había sido totalmente ajena a la preparación del complot de los generales Rawson y Ramirez. En 1955 la caída de Perón señalaba la vuelta de los partidos "democráticos", víctimas del peronismo. En 1962, el viejo partido radical se desquita de su fracaso electoral de 1958 ocasionado por la "traición" de Frondizi. Y los partidarios de este último complotan contra el presidente radical que resulta derrocado en junio de 1966. En 1976, después del paréntesis del segundo peronismo, los conservadores de todas tendencias se acercan al poder militar y les ofrecen su apoyo o sus competencias individuales.

2) Todos los partidos buscan el oído de los militares para sus propios fines políticos. Nunca el ejército (en el sentido del conjunto de las fuerzas armadas, por supuesto) es rechazado de plano como una amenaza para el libre juego de la vida política o como un simple instrumento de las clases dominantes. Los militares están vistos como sujetos mayoritarios en un juego complejo y a veces bizantino en el que nada se hace contra ellos o sin ellos. Si el antimilitarismo no aparece en los discursos públicos y en los comportamientos colectivos de derecha o izquierdas —es muy distinto a nivel individual, sobre todo quizá después de 1976— es porque a las fuerzas armadas, a pesar de sus evidentes tendencias conservadoras, no están consideradas, como vinculadas por definición o naturaleza a ningún sector social defnido y limitado. Todas las formaciones políticas esperan que el ejército responda a sus aspiraciones en principio contrardictorias. El mismo Partido Comunista, a pesar del anticomunismo oficial de las fuerzas armadas argentinas (muy anterior a la doctrina de las "frentes ideológicos" de los años sesenta y que se remonta a 1919), se reafirma empínicamente por descubrir oficiales "patriotas y progresistas". Lo que ocurre a veces, como pasó con un prestigiado general rival del propio Onganía a principios de los años sesenta.¹² A veces también

¹² Véase "General Carlos Jorge Rosas", *Problemas de Economía*, Buenos Aires, octubre-diciembre de 1969, p. 4.

no vacila en considerar como tales a ciertos gobernantes de uniforme que aparecen como un mal menor en la medida en que, entre otras cosas, mantienen relaciones aceptables con la Unión Soviética. Así es como el P. C. argentino da cierto tipo de apoyo crítico al gobierno del general Videla por miedo a un golpe "fascista-pinochetista"¹³ y favorece para salir de la *impasse* institucional una "convergencia cívico-militar" capaz de restablecer los valores democráticos. En la izquierda, una versión idealizada del modelo nasserista, y luego de la experiencia militar peruana, se ha entroncado en una interpretación revolucionaria del peronismo.¹⁴ Los justicialistas de izquierda durante mucho tiempo han esperado la llegada de un nuevo "coronel de los trabajadores". Es cierto que a veces fueron los mismos que tras largo y frustrado flirté con los militares entablaron la guerra sin cuartel contra "el ejército de ocupación" y cayeron víctimas de sus presuntos aliados del día anterior.

8] Así, el militarismo es universal. "El sueño del coronel propio" ha sido en algún momento la fórmula de salvación para todos los grupos políticos, de los mayores a los más insignificantes, de los más democráticos hasta los más genuinamente autoritarios. En el sistema así edificado civiles y militares no se enfrentan, son complementarios y componen alianzas de recursos obviamente dispares. Los militares no son de ninguna forma, como se ha podido creer, los obstáculos al libre desarrollo de las instituciones democráticas. No corresponde a la realidad imaginar la vida pública nacional como una batalla campal entre dos bandos, por un lado los civiles heroicos defensores de las instituciones republicanas y por el otro los oficiales antidemocráticos por naturaleza y codicia del poder. No sólo los civiles rondan los cuarteles en busca de aliados uniformados sino que las cabezas políticas de las fuerzas armadas están siempre al acecho de apoyos partidarios sin conrapartida. Ayer Perón, Aramburu o Lanusse, hoy día el almirante Massera o el general Viola ilustran esta búsqueda en la que el poder coercitivo de las armas nunca está ausente.

Así se entiende que en esta situación de interdependencia que conduce a una militarización de la vida política y a una politización aceptada de las instituciones militares, la estabilidad y regularidad institucional están fuera de alcance. Esta tendencia, que se ha descrito a ve-

¹³ Véase entre otros documentos, Athos Fava, "Respuesta a la convocatoria al diálogo, la convergencia militar y la unidad nacional", Buenos Aires, 9 de abril de 1977 mimeo, 22 p., y *Informe*, 23 de diciembre de 1980, Suplemento especial.

¹⁴ Para una muestra de esta orientación, véase Jorge Abelardo Ramos, *Historia política del ejército argentino: de la legión Lautaro a la industria pesada*, Buenos Aires, 1959; y del mismo autor ante un caso concreto, polemizando contra la "izquierda cipaya" que no sabe reconocer a los militares patriotas: J. A. Ramos, "El ejército argentino y la teoría de Pavlov", *Martín* (Montevideo), 9 de agosto de 1966.

ces como una variante de "Estado pretoriano moderno", se complica aun más por los intereses corporativos y los recursos propios desarrollados a lo largo del tiempo por las fuerzas armadas. La "inversión pretoriana" no se reduce a una cooptación de oficiales por políticos. Las alianzas funcionan en los dos sentidos y a veces independientemente de cualquier aparente interés social por razones fundamentalmente corporativas, como en el caso del golpe de 1943. Sin embargo, de manera general en una sociedad pretoriana como la Argentina, las fuerzas armadas en cuanto sector militar del Estado se vuelven el leitmotiv y el objetivo de las luchas políticas. Lo que obviamente se relaciona con las vinculaciones mantenidas entre los distintos actores y el aparato estatal.

Las raíces sociales de la inversión pretoriana

¿A qué se debe entonces esta guerra de todos contra todos que transpira en el sistema político tal y como lo acabamos de evocar? Porque todas las fuerzas sociales, todos los grupos de interés defienden sus derechos o privilegios sin miramientos ni consideración por el juego institucional cuando es obvio que los objetivos sociales de las luchas políticas son más bien moderados. Sin embargo, todo ocurre como si la victoria del grupo fuese vital para su supervivencia, o, en todo caso, mereciera que se le sacrificara el edificio institucional que consagra la coexistencia social. El patriotismo sectorial caracterizado por un comportamiento que algunos han llamado "tribal" desemboca en un "sálvese quien pueda" del que nadie escapa. ¿De dónde procede esta dinámica perversa que poco debe a las sucesivas y cambiantes coyunturas continentales?

Las hipótesis que más parecen imponerse no son sin embargo las más fundadas. Por ejemplo, la determinación económica de las intervenciones militares no parece muy clara. Se podría pensar que la inercia del dinamismo económico que corre pareja con una inflación que puso a Argentina en la primera fila en el continente entre 1960 y 1970 y les valió el título mundial desde 1975 tiene algo que ver con las discontinuidades políticas. Un crecimiento bastante bajo y una inflación altísima configurarían juntos las manifestaciones de un "juego de suma cero" que tiene efectos desestabilizadores. ¿Las luchas intersectoriales para el reparto de un producto estancado no serían entonces responsables de las recurrentes intervenciones militares? Así se explicaría que los diferentes actores, anhelosos de tener acceso al poder por todos los medios para participar en mejores posiciones en la pugna distributiva, acudan a la fuerza y llamen a la puerta de los cuarteles.

Cierto es que la inflación como medio de redistribución conflictual de una renta inmóvil puede prolongarse en el plano de la política pretoriana. Todo eso dejaría prever por consiguiente que existe una posible coincidencia entre los periodos de menor expansión y por ende de más aguda pugna distributiva y las rupturas del orden constitucional. Si examinamos el crecimiento del PIB en los dos o tres años anteriores a las "revoluciones" militares exitosas, no se ve sin embargo confirmada la hipótesis de una incidencia directa de las depresiones económicas sobre los golpes y el derrocamiento de los gobiernos. Lo que transpasa de los indicadores (por precarios que sean ya que las fluctuaciones sinusoidales de la economía ofrecen largos periodos de homogeneidad) corresponde más bien a la hipótesis contraria. Los años inmediatos a los golpes de 1955, 1962 y también los que preceden un cambio de presidente militar, como en 1970, son años de apreciable crecimiento: 7 y 8,8% en 1953, 1959; 8 y 7% en 1960 y 1961; 8,1 y 8,6% en 1964, 1965; 4,8 y 6,9% en 1968, 1969.¹⁵ La tasa de crecimiento anual se sitúa alrededor del 6% en 1973, 1974, 1927-1929,¹⁶ y no hay que olvidar tampoco que los años 1973, 1974, antes de la caída de 1975, año en que ya la ruptura por descomposición del régimen se ha producido, oscilan cifras altamente positivas (6,4% y 6,8% respectivamente).¹⁷ Si agregamos que la Argentina no conoce de hecho, como por ejemplo el vecino Uruguay en los años sesenta, un estancamiento absoluto de su crecimiento podemos concluir que la interpretación de la inestabilidad política por el estancamiento inflacionista desembocando en el Estado pretoriano no responde a la realidad.

Tampoco tienen mucho valor explicativo en el otro extremo del espectro teórico la interpretación del caso argentino como "crisis de participación" según los enfoques neoinstitucionalistas. Según éstos, la participación masiva y temprana de los argentinos en la vida política a través entre otros de un nivel elevado de movilización electoral, sería la mayor causa de inestabilidad. Dado que las intervenciones militares tienen por consecuencia anular los resultados del sufragio universal, a veces a título preventivo, se podría inferir que las intervenciones desempeñan el papel de mecanismos de desmovilización frente a una movilización a la vez política y social demasiado intensa para el equilibrio del sistema. Así la extensión de los derechos políticos efectivos primero a las clases medias rurales y urbanas y luego a las clases populares urbanas habría desestabilizado la vida poli-

tica. La integración de nuevos grupos sociales al sistema político institucional destinada a reducir las tensiones provocó al contrario la crisis total del sistema representativo. Tal interpretación bastante antológica y de poco valor explicativo permite sin embargo plantear algunos interrogantes complementarios. ¿Por qué una movilización política acelerada consentida por los grupos dominantes ha provocado una crisis de participación? ¿Por qué, en ausencia de cualquier tipo de amenaza revolucionaria, el sistema democrático representativo no ha podido sobrevivir? Muchas experiencias han demostrado el uso conservador del sufragio y no sólo en los regímenes plebiscitarios. A menudo inclusive la extensión del sufragio en sociedades de fuertes rigideces ha podido tener un efecto socialmente conservador. Lo que sugiere que el recurso a mecanismos violentos de desmovilización para oponerse a las funciones normales de un sistema pluralista legítimo y estable sale del marco político. Sólo móviles sociales referentes a la composición y a las modalidades de dominación de las capas superiores pueden motivar semejante fenómeno. Si atribuimos la crisis de participación a la anterioridad de la movilización política con relación a la aparición de un sistema partidario eficaz que permitiera una representación adecuada de las diversas capas sociales volvemos de nuevo al campo social. Dentro de esta perspectiva, se ha podido señalar la ausencia de un partido conservador de masas bien organizado y apto para ganar las elecciones. Es decir de un gran partido nacional que tuviera la confianza de los grupos económicos y de las capas sociales dominantes pero que fuera capaz de obtener un amplio apoyo popular como tienen o lo han tenido el Partido Nacional chileno o el Partido Conservador colombiano.

A este propósito es cierto que la Argentina nunca tuvo después de 1914 un partido conservador moderno con voluntad de aceptar el juego de las instituciones representativas y que los sucesivos avatares del conservadurismo nunca han podido ganar una elección nacional. De ahí se puede pensar que los intereses vinculados al *statu quo*, importantes para asegurarse una influencia política en consonancia con su importancia electiva, prefieren actuar fuera del sistema representativo y en contra de él. Su indulgencia para con el fraude electoral y las proscriptores políticas es significativo a este respecto. Sin embargo este análisis merece algunas observaciones. Primero las intervenciones militares no resultan siempre de una presión o de un llamado de los grandes intereses o de las "oligarquías". El cuadro pretoriano es mucho más complejo. Por otra parte la ausencia de partido conservador no significa que la derecha en la Argentina fuera débil y la izquierda fuerte. Lo que más ha llamado la atención es, por el contrario, la falta de movimientos de izquierda poderosos y con raíces profundas.

¹⁵ Fuente: Banco Central de la República Argentina, *Boletín Estadístico*, pasim.

¹⁶ Según C. Díaz Alejandro, *Essays...*, op. cit., p. 53.

¹⁷ *Financial Times*, 30 de abril de 1979, F.T. Survey, "Argentina", p. 18.

El abanico de las principales formaciones políticas se abre más bien del centro hacia la derecha. Y los partidos moderados no faltan faltado desde hace medio siglo. Además los dirigentes representativos del radicalismo o del peronismo no pueden considerarse como revolucionarios o izquierdistas. ¡No olvidemos que en 1976, para tomar sólo este ejemplo, las fuerzas armadas apartaron del poder a un gobierno netamente inclinado hacia la extrema derecha!

No obstante, a pesar del bajo nivel de polarización real y de alter-nativas sociales presentados por los partidos argentinos, las grandes corrientes políticas, desde la llegada al gobierno de los radicales en 1916, se excluyen recíprocamente. Toda alternativa civilizada parece imposible. Sin embargo, a principios de siglo, entre conservadores y radicales las diferencias son escasas desde el punto de vista programático o ideológico y no representan a sectores productivos inconciliables. Antes bien sus élites ostentan perfiles claramente similares. Hasta se ha notado que, en lo que a posición económica se refiere, los jefes del radicalismo se encontraban muchas veces por encima de los conservadores.¹⁸ Esto también nos remite a los roles sociales, y más precisamente la formación de las clases superiores argentinas, y a su articulación con el aparato productivo.

Enfrentamientos sectoriales y dominación social

Si miramos de nuevo las series estadísticas de los indicadores económicos, nos damos cuenta de la recurrencia de desequilibrios sectoriales. A nivel productivo primero. Cuando un sector es floreciente, otro se encuentra deprimido: no parecen existir efectos de arrastre sino crecimiento de uno a expensas de otro. Así no sólo el alza del sector industrial provoca un fuerte desequilibrio de la balanza de pagos y la disminución de las reservas, sino que cuando la producción industrial baja las reservas suben y el balance de pagos arroja un saldo positivo. La amplitud de las transferencias sectoriales ha sido subrayada por todos los analistas de la economía argentina. El agropecuario presenta las variaciones más altas. Entre 1947 y 1964, por ejemplo, la participación en el ingreso interno de este sector ha variado anualmente entre + 4.4% y - 3.5%.¹⁹ En porcentaje del ingre-

¹⁸ Ezequiel Gallo, Silvia Sigal, "La formación de los partidos políticos contemporáneos. La Unión Cívica Radical, 1890-1916", *Desarrollo Económico*, abril-septiembre de 1963, pp. 177-179.

¹⁹ Las cifras sobre fluctuaciones financieras están tomadas de Clarence Zuvekas Jr., "Argentine economic policy, 1958-62", *Interamerican economic affairs*, 22 (1), Summer 1968 y *op. cit.*, *El desarrollo económico y la distribución del ingreso en la Argentina*, Nueva York, 1968, p. 217.

so total del mismo sector, estas fluctuaciones van de + 34.8 hasta - 20.8%. Junto con la fiscalidad, las manipulaciones de tasas de cambio orientan las transferencias de ingreso: un peso sobrevaluado reduce los ingresos del sector agropecuario y subvenciona al sector industrial tanto favoreciendo sus compras de insumos importados cuanto reduciendo sus costos internos. Los bajos precios (unidos a otros mecanismos fiscales) no sólo financian la acumulación industrial sino mejoran el consumo popular. Por el contrario, el sector de los consumidores y el sector industrial suelen padecer de las devaluaciones del peso hechas para aumentar las exportaciones agrarias cuando no interfiere otras medidas financieras o arancelarias.

Todo sucede como si las transferencias de ingresos giran en torno al sector agropecuario, eje de la economía nacional y productor de las divisas indispensables para el funcionamiento de las industrias. Entre 1950 y 1960 el monto de los ingresos transferidos al sector agropecuario es estimado por Aldo Ferrer en unos 2.5 billones de dólares US 1960.²⁰ Ahora bien, en todos los casos y en los dos sentidos de la intervención del poder militar pone en marcha los mecanismos de redistribución sectorial. Los golpes de Estado de septiembre de 1955 y marzo de 1962, lo mismo que la revolución de palacio de junio 1970 que derroca a Onganía están seguidos por devaluaciones decisivas del peso que favorecen las exportaciones agropecuarias. Y también en 1959 cuando las presiones de militares *gorilas* orientan la política económica frondizista en un sentido de ortodoxia liberal. En 1976 las primeras medidas de la política económica consisten en mejorar los valores relativos de la producción agropecuaria, dando precios remunerativos a los productores.²¹ Después de tres años de fuerte depresión agrícola los incentivos de tipo fiscal del nuevo régimen crean una bonanza agrícola notable, si bien de corta duración, mientras la industria entra en una crisis sin precedentes y el salario real obrero pierde alrededor de 50% en un año.

Es preciso notar además que las transferencias sectoriales afectan fuertemente la repartición de ingresos entre asalariados y no asalariados. Si examinamos la participación global de los salarios en el ingreso nacional, vemos que estas fluctuaciones están vinculadas a las relaciones sectoriales señaladas previamente. Debido al peso menor de los salarios en la producción agropecuaria que emplea poca mano de obra, todo crecimiento de la participación relativa del sector rural provoca una caída de la participación de los salarios en la

²⁰ Aldo Ferrer, *La economía argentina, las etapas de su desarrollo y problemas actuales*, México, Buenos Aires, 1963, p. 215.

²¹ Para las medidas oficiales a este respecto, véase Presidencia de la Nación, *Señalamiento y expansión de la economía argentina*, Buenos Aires, 1976, pp. 24 y 25.

distribución del ingreso. Las discontinuidades políticas cuando provocan crisis económicas globales golpean particularmente los ingresos salariales. El mejoramiento de la posición del sector agrícola, merced al alza de precios relativos, frena la expansión industrial tanto como provoca la retracción del consumo popular.

Todas las series estadísticas apuntan a una relación entre las intervenciones militares y el nivel o la masa relativa de los salarios. Las tendencias se invierten con el cambio de gobierno no programado. Así en 1955 empieza, fuera de toda fluctuación cíclica o importada, un periodo largo de redistribución regresiva del ingreso a favor de los empresarios. Si el movimiento no se invierte totalmente antes de 1973, presenta fluctuaciones reducidas que siguen el ritmo de las relaciones político-militares. En 1959 la remuneración total del trabajador pierde casi 6% ¹¹ y los salarios horarios retroceden en 20%. En 1962 se produce una caída de cerca del 2% de los salarios-horarios —que van a mejorar levemente en 1964—, y una baja global de la remuneración del trabajo.

También se puede señalar que los golpes de 1955, 1962, 1966 y 1976 se sitúan en fases de altas coyunturas salariales o de rectificación de una situación desfavorable para el sector trabajo. Al contrario, en 1943 la remuneración del trabajo estaba bajando cuando es derrocado el presidente conservador y los salarios suben netamente bajo el gobierno militar entre 1943 y 1946.

Los casos de 1943 y 1966 prueban, si era necesario, que no se trata de ninguna relación mecánica sino más bien de tendencias, y que la política determina la economía y no lo contrario. Las dos intervenciones no directamente favorables a los intereses agrarios se verifican en periodos de euforia financiera de saldo netamente positivo del balance de pagos, mientras las rupturas favorables a los intereses agrarios coinciden con situaciones de crisis financieras. En el primer caso el sector consumidor es favorecido y en el segundo, que aliena un tipo de industria distinta al de 1943, se congelan los salarios, cuya participación pasa de 46.3% en 1965 a 37% en 1973, uno de los niveles más bajos de la historia económica argentina, antes de 1976. ¹² En 1966, se apunta una industrialización monopolista con concentración de ingreso mientras que en 1943 la transferencia sectorial se armonizaba con una amplia redistribución a favor del consumo popular, es decir tanto de consumidores como de productores orientados hacia el mercado interno de bienes no durables.

¹¹ Fuentes: Secretaría de Asuntos Económicos, *Producto e ingreso de la República Argentina en el período 1935-1954*, Buenos Aires, 1955, p. 120; *ceram*, *El desarrollo económico y la distribución del ingreso*, op. cit., p. 164; Díaz Alejandro, *Ensayos...*, op. cit., p. 527.

¹² Según Cámara de comercio, *financiera en la República Argentina*, *Cuadernillo de Comercio Exterior...*, enero-febrero de 1973, p. 11.

Las observaciones que preceden podrían sugerir una interpretación errónea de la realidad argentina. Se sabe por supuesto que la historia reciente de este país no se explica por el enfrentamiento entre una clase de terratenientes arcaica y una burguesía industrial progresista. Este esquema inspirado en situaciones europeas o de visones dogmáticas del devenir histórico no tiene ningún fundamento real. Pero tampoco corresponde a la especificidad de la formación social rioplatense la afirmación de una identidad total entre sectores agropecuarios e industriales. ¹³ El perfil de las clases dominantes argentinas es mucho más complejo de lo que esas simplificaciones ideológicas o teorizantes hacen creer. Vamos a tratar de esbozar a grandes rasgos las características de estos grupos sociales.

La especificidad de la sociedad argentina se debe ante todo a la existencia de un grupo dominante nacional relativamente homogéneo que detenta el prestigio y domina el sector motor de la máquina económica. A diferencia de las economías de enclave (Chile, Méjico) o de los sistemas exportadores más diversificados (Perú, Méjico) y en contraste con los países que conocieron diversos ciclos de prosperidad económica con sus secuelas de efímeras dominaciones regionales (como en Brasil), la Argentina moderna conoce una élite única y "natural" que se reclama —cuando no desciende directamente de él— del grupo dominante que llevó el país a la prosperidad y lo reveló al mundo. Este grupo que se ha ampliado o diversificado se remonta a los constructores de la economía agroexportadora que administraron el proyecto "civilizador" de la segunda Argentina, integrada al mercado mundial como "granero del mundo" a la ecónoma europea se hizo en condiciones excepcionales que explican la opulencia repentina de este rincón olvidado del ex imperio español. La fertilidad y la disponibilidad de tierras unidas a la ausencia de obstáculos de clima o de población permiten al país gozar de notables ventajas comparativas. El territorio semidesértico se abre a la inmigración europea masiva en condiciones de semi-monopolización de las tierras. La "renta diferencial" de la tierra pampena dentro del mercado internacional engendra cuantiosos excedentes económicos apropiados por una minoría que concentra la riqueza y se esfuerza en modernizar el país. Las ciudades se urbanizan rápidamente. La prosperidad agroexportadora necesita un mano de obra numerosa pero sobre todo las infraestructuras urbanas: comercio, puertos, servicios, reparaciones. La concentración urbana y el desarrollo de las clases medias y obreras son dos fenómenos

¹³ Según la tesis polénica defendida por Milcíades Peña en varios artículos; véase

"Rasgos biográficos de la famosa burguesía industrial argentina", *Fichas de investigación económica y social*, Buenos Aires, abril de 1964.

todo por los "nuevos argentinos" que le deben su instalación en esta su segunda patria. Hasta 1930 esta "fórmula de justificación" es permire una indiscutible estabilidad política. En otras palabras, la eficacia del sistema es la fuente principal de legitimidad: lo que puede parecer lógico en una sociedad de hombres transplantados. He aquí porque los excluidos del sistema creado en beneficio propio por el grupo dominante —llamémoslo oligarquía o gran burguesía antes de situarlo mejor— sólo exigen participar. Aspiran a integrarse a la prosperidad nacional sin discutir ni su dirección ni sus beneficiarios privilegiados ni su extrema vulnerabilidad. Piden el perfeccionamiento del proyecto agroexportador no su sustitución por otro. Nadie se atreve a pedir el sacrificio de la "gallina de los huevos de oro"; las ventajas comparativas configuran el horizonte económico absoluto. Nada de lo que hizo la riqueza del país es puesto en cuestión: ni la concentración de la tierra ni la especialización agropecuaria ni incluso a los a la gran burguesía con visos de aristocracia que asienta su dominación en éstos inquebrantables principios.

El radicalismo, que se forma en representación de los grupos propietarios marginados no tienen ni en tiempos de Yrigoyen un programa económico. Las nuevas capas sociales, pequeños empresarios (de origen muy a menudo extranjero), ganaderos medianos, chacareros y profesionales, empleados públicos y comerciantes que apoyan al Partido Radical, están plenamente integradas al esquema agroexportador. Sin proyecto alternativo ni objetivos propios, las clases medias aun industriales no tienen ninguna autonomía. Su posición subordinada es consentida y no les permite quebrantar el modelo económico dominante sino adaptarse. Las capas medias en general y las clases populares son aún menos proclives a defender el desarrollo industrial que la minoría dominante, como la actitud de radicales y socialistas lo han mostrado. Hasta el peronismo, a despecho de su fraseología "antioligárquica" y a veces anticapitalista, no representa sino la coronación del sistema, el último e involuntario perfeccionamiento del proyecto nacional de los *landlords* pampeanos por la integración de las clases populares a una prosperidad rediviva merced a la segunda guerra mundial. La dinámica industrialista del régimen justicialista, que sólo prolonga la opción resignada de los conservadores frente a la gran depresión, no se acompaña de ninguna transformación estructural. Las transferencias de ingreso agudizan las tensiones pero la concentración de la propiedad no se toca. Verdad es que las reformas que en otros países aparecen como meramente reformista —y a veces técnicamente adecuadas al mejor funciona-

¹⁵ La expresión es de Natalio Botana en "La vocación política de los argentinos: burocracia militar o democracia pluralista", *Crónica*, 25 de diciembre de 1970, p. 863.

interconectados. Se consideraba en 1914 que un 41% de la población económicamente activa no pertenecía ni a las capas populares ni a la clase superior.¹⁵ Ningún país del continente tiene entonces semejantes características. La distribución de la población activa en el mismo año se establece como sigue: primario: 28%; secundario: 35.7%; terciario: 35.9%. Más o menos los porcentajes de Francia, país industrializado, en 1954.¹⁶ Este país agropecuario no tiene campesinos y su desarrollo industrial ya es notable a principios de siglo: pero no se trata de un gran número de pequeñas industrias pesadas; las cifras están abultadas por un gran número de pequeños talleres. El terciario, cuya preponderancia se ha considerado a menudo como una característica de las sociedades industrializadas, resulta aquí por la proliferación del comercio minorista, de los intermediarios, de los servicios colectivos y personales exigidos por la opulencia de las ciudades y el lujo de los particulares. Mientras la riqueza se concentra entre las manos de la minoría emprendedora que se propone a partir de 1880 introducir la "civilización europea" en la tierra de los *querandés* y de los *ranquels*, la expansión del consumo está fuera de toda proporción con el desarrollo de las fuerzas productivas.

La élite dirigente, liberal y cosmopolita, ejerce una dominación ilustrada: creadora del progreso de la nación defende sus privilegios a través de su rol histórico. Nadie amenaza su poder. El proyecto de la "segunda Argentina" identificado con el progreso indefinido de una economía extrovertida, racionalizado por la "generación de los próceres del ochenta", no ha sido puesto en tela de juicio por nadie. Los industriales saben que la actividad agroexportadora es la condición de su prosperidad. Clases medias y populares son ante todo sectores consumidores que se oponen a cualquier política arancelaria que fomenta las industrias a costa del encarecimiento de los bienes de consumo.¹⁷ En el propio campo, los grupos dominantes ignoran los conflictos sociales. La ausencia de campesinado tradicional y tanto de relaciones precapitalistas como de concentración de asalariados directamente vinculados al sector productor les ahorra todo tipo de problemas en este sentido. Los escasos peones de la ganadería extensiva no amenazan su tranquilidad.

Así es como el sistema agroexportador, sacralizado inclusive por sus beneficiarios menos favorecidos, es aceptado por todos y sobre

¹⁵ Ricardo M. Ortiz, *Historia económica de la Argentina*, Buenos Aires 1964, tomo II, 1969, p. 33.

¹⁷ Véase a este respecto Oscar Cornblit, "European immigrants in Argentina, industry and politics", en Claudio Véliz, ed., *The politics of conformity in Latin America*, pp. 235-245 y también Miguel Murrín y Juan Carlos Portantiero, *Estudios sobre el peronismo*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971, p. 25.

miento del orden capitalista-- se consideraran aquí como intrínsecamente perversas y antinacionales.

Por todas estas razones es obvio que las transferencias sectoriales que se vislumbran en las estadísticas y que parecen desencadenadas por las discontinuidades políticas no corresponden a enfrentamientos de sectores en pugna para orientar y dirigir la sociedad. Si bien existe una pugna para la distribución del ingreso, las composiciones sectoriales no engendran "efectos pertinentes" que permitan concluir sobre la existencia de un divaje sociopolítico de tipo clásico.

Dominación sin hegemonía: una hipótesis

En la Argentina todo parece girar en torno a un grupo dominante estrecho que se conoce intuitivamente y que no resulta muy fácil de circunscribir ni de situar: ¿oligarquía, minoría dominante, fracción dominante de las clases superiores, gran burguesía? Los partidos oligarcas suelen denunciar este grupo "plutocrático" de supuestos oligarcas como una "sinarquía" peligrosa para los intereses mayoritarios. Podemos pensar que se trata de un mero estratagema retórico para designar el enemigo común de un amplio frente interclasista y que no tiene nada que ver con el análisis sociológico. Sin embargo este lugar común de las convocatorias populistas nos parece más bien como los fantasmas de Sancho: por supuesto que no existen; ¡pero que los hay, los hay! Lo que significa que este mito sociopolítico tiene algún fundamento y que sin caer en la historia conspirativa y en las mitologías demagógicas puede ofrecer una pista de interpretación de la realidad histórica. La hipótesis que formulamos a partir de esta es que no importa mucho la identificación de los integrantes de esta fracción superior de la gran burguesía. Lo que sí tiene fuerte gravitación a través del tiempo y permite ocupar un lugar más alto en la cúspide de la pirámide socioeconómica es una pauta de acumulación, un comportamiento permanente que tiende a la polivalencia sectorial inercial a una gran ductilidad en el uso de las inversiones que hace posible un acceso exclusivo al Estado. Antes de 1930 la poca diversificación económica, las inmensas posibilidades de expansión horizontal y las ventajas comparativas daban a esta estrategia y a los que la aplicaban un papel funcional para el conjunto del sistema que legitimaban. Después del treinta los cambios estructurales que concierne la economía argentina hacen que las mismas pautas produzcan efectos económicos cíclicos y el afianzamiento de la inestabilidad política. No decimos que esta fracción dominante multisectorial es la que desencadena las discontinuidades políticas sino que la crisis política permanente se da en la forma observada porque existe este grupo

socioeconómico con su comportamiento caracterizado por una gran flexibilidad financiera unida al apoyo estatal, y al mismo tiempo que este grupo se refuerza con esta crisis permanente. Vamos a ver algunos elementos que aclaran esta hipótesis que, bien es cierto, no necesitaría una comprobación empírica más amplia que la que podemos ofrecer aquí.

Los integrantes del grupo social que se apoderan de la mejor tajada de la "renta diferencial" no se limitan a administrar sus estancias de la provincia de Buenos Aires y a ser los "dueños de la tierra". No son puros ganaderos ni terratenientes. Su dominio de la economía es más complejo y completo. Este grupo controla varios resortes de la vida económica. Por vocación sus miembros son más comerciantes y financieros que ganaderos o agricultores; no sólo porque, volcados al mercado internacional, tienen la vista fija en las cotizaciones de los productos de la tierra sino porque no siempre son de origen terrateniente. De igual modo, históricamente, en tiempos de la colonia, los grandes estranceros fueron primero comerciantes.¹⁹ Y a finales del siglo XIX los grandes apellidos de la actual llamada oligarquía, como bien lo señaló Jorge F. Sabato, eran hombres de negocios y sus descendientes siguieron siéndolo.²⁰ Anchorena, Santamarina, Devoto, Bullrich, Lanusse, Milhanovich, Martínez de Hoz, nombres de dinastías oligárquicas que suelen vincularse con la propiedad agraria se desempeñaron al principio de su encumbramiento como importadores, consignatarios, transportistas, comerciantes.²¹ Estaban situados en el sector clave que manejaba los productos del país. Históricamente los hacendados puros no tenían el capital necesario para formar el sector dominante mientras los comerciantes pudieron por su mar el sector dominante mientras los comerciantes jugaron con la valorización de situación y sus capacidades financieras jugar con los intereses las tierras vendidas por el Estado.

Este grupo no se identificaba entonces meramente con los intereses rurales o con el sector agropecuario si bien su base era sobre todo fundiaria y ganadera. Como muy gráficamente lo describió el periodista francés Huret en un texto famoso de 1911, "anda se hace en el país sin ellos y fuera de ellos" en todos los sectores. "Argos de cien

¹⁹ Cf. Valdo Ansaldi, *Notas sobre la formación...* op. cit., pp. 12-15 y Tullio Halperin Donghi, *Política, economics and society in Argentina in the revolutionary period*, Cambridge, 1975, pp. 34-60.

²⁰ En un anticipo sumamente sugerente de un gran trabajo todavía inconcluso véase sus "Notas sobre la formación de la clase dominante en la Argentina moderna (1880-1914)", Buenos Aires, CIPA, 1979, mismo.

²¹ Como lo subraya también Sabato y como lo podemos leer en los estudios históricos citados o en *Twentieth Century Impression of Argentina. Its history, people, commerce, industries and resources*, Londres, Lloyd's Greater Britain Publishing Company, 1911, pp. 387-484.

Por esto es porque no puede haber de modo estructural enfrentamiento de sectores ya que la fracción superior de cada ramo pertenece a ambos y no se siente comprometido con ninguno. Además al lado de este grupo multisectorial dominante los demás sectores agrarios e industriales presentan un grado muy alto de heterogeneidad, lo que en el caso de la industria impide una "expresión industrial permanente". En el sector agrario los grupos no diversificados, no privilegiados para algunos, están lejos de tener siempre los mismos intereses que la fracción antes aludida. Los productores que no pueden aprovechar las cambiantes oportunidades se oponen a la gran burguesía agraria dominante. Las contradicciones coyunturales se dan entre estratos de un mismo sector más que entre sectores. En el campo industrial —donde coexisten las grandes industrias de bienes de origen agropecuario, en sus dos versiones, volcadas hacia fuera (friegoríficos sobre todo) o hacia dentro (azúcar, vino, aceite) y a veces produciendo para ambos mercados, al lado de la pequeña industria de consumo local atomizado, luego de las nuevas industrias dinámicas y de las sucursales de las empresas extranjeras de bienes de consumo durable o de equipo— la solidaridad entre estratos es aún menor. Un liderazgo industrial difícilmente aparece, como lo demuestra la cúpula de la Unión Industrial ocupada durante treinta años por un productor de vino y cuya orientación muchas veces coincidió con las perspectivas trazadas por la Sociedad Rural, reducto de los grandes ganaderos.

Los conflictos internos entre estratos productivos agrarios son bien conocidos: enfrentamiento entre invernaderos y criadores, entre grupos agrarios alrededor de la industrialización después del treinta y que se manifiesta hoy por las diferencias que separan la Sociedad Rural y CARAP y las demás asociaciones de productores rurales. La diversificación económica de la fracción superior de la gran burguesía tiene también su prolongación en el plano político. Su movilidad sectorial se reproduce en el terreno de las alianzas que permiten su permanente dominación. Puede aliarse con los estratos agrarios subordinados para componer un frente común del campo (como en 1970), con ciertos grupos industriales en contra de los ganaderos subordinados como en 1935-1940, pero siempre estas alianzas son precarias y transitorias. El objetivo del grupo dominante es tener las manos libres de compromisos y tener acceso a las decisiones del Estado. A pesar de su anticostatismo y de su liberalismo a ultranza, esta fracción dominante debe todo al Estado, que distribuyó las tierras en el siglo pasado y sigue concediendo las operaciones más suculentas, que puede beneficiar o perjudicar los diversos grupos sociales porque instrumenta las transferencias de ingresos y el manejo de la "renta diferencial". Por su posición económica crucial este grupo tiene poder

ojos... Briarco de cien brazos...³³ están al acecho de los buenos negocios, de las oportunidades jugosas. Especuladores y jugadores, es- capitalistas, prontos a adoptar cualquier innovación redituable y adaptarse a las cambiantes circunstancias, buscan ante todo la ganancia rápida. Nacidos a horcajadas de la valorización agraria y de la especulación comercial, ostentan un estilo de vida de aristocracia agraria, "de señor en tierras de colonia".³⁴ Pero la tierra es un bien que se valoriza, un valor, refugio y a la vez referente simbólico y legitimizante para ellos; no es un feudo pasivo y arcaico.

Lo que ha sido subrayado por varios autores es que la continuidad de la propiedad territorial no implica la inmovilidad productiva. Al contrario, la flexibilidad en el manejo de las inversiones, la capacidad de movilizar rápidamente sus recursos financieros y de diversificar sus fuentes de ganancias son otras tantas características visibles de este grupo clave. Bien se sabe cómo los mismos ganaderos supieron fomentar la agricultura. Vinculados desde temprano a las industrias exportadoras ligadas al agro, frente a la gran depresión de 1930 la gran burguesía agroexportadora favoreció el proceso de sustitución de importaciones "funcional", para sus intereses diversificados.³⁵ En este grupo dominante podemos considerar que no existe una especialización sectorial, sus integrantes pueden pasar con suma rapidez de la ganadería a la agricultura y luego a la industria, u hoy de la industria a la importación (y viceversa). Nuestra hipótesis es que lo que cuenta parece ser, para este grupo social dominante, cualesquiera sean sus miembros, precaverse contra esquemas rígidos de inversión,³⁵ para poder mejor aprovechar las coyunturas favorables y dispensar los riesgos. El Briarco o el Argos dominante forma una burguesía "multisectorial" de hombres de negocios que cuanto más diversificados, más libres y más poderosos. Algo que entendieron hasta los recién venidos, industriales o financieros sin "abollengo", quienes para alternar en el Olimpo de los preponderantes compran tierras, multiplican sus inversiones, aprovechan todas las oportunidades especulativas.³⁶

³³ Jules Huret, *En Argentine, de Buenos Aires au grand Chaco*, París, 1911, p. 36.

³⁴ Georges Clemenceau, *Notes de voyage dans l'Amérique du Sud*, Argentine, Uruguay, Brésil, París, 1911.

³⁵ Como lo han mostrado Miguel Murrin y J. C. Portantiero, *op. cit.*

³⁶ Es lo que para una época anterior señala J. F. Sábato en el estudio citado.

³⁷ Los "grandes industriales" no sólo compran campos para el prestigio que depara la propiedad fundiaria. Los industriales y hombres de negocio exitosos, inclusive los más recientes, practican la misma diversificación. Véase la composición del grupo Pérez Campaño y su dedicación a actividades ganaderas y también la de grupos de reciente o ascenso (y caída) como Capozzollo u Orlonue. Cf. J. Schwarzler, *op. cit.*, p. 344 y *Latin America Weekly report* N° R 80-27, 11 de julio de 1980; "The rise and fall of Ordone empire".

de veto económico, lo que se transforma rápidamente en poder de deslegitimación política.

Cabe señalar aquí que la inculcación de esta fracción burguesa con la gran burguesía agraria tradicional no es nada clara porque este grupo aparece como bastante heterogéneo hoy día. Al lado del *establishment* socioeconómico que tiene hazos estrechos con el sector agroexportador tradicional, han aparecido los responsables de "grupos económicos emergentes" que muy a menudo han tenido un ascenso meteórico debido a su alianza con algún encumbrado miembro de la burocracia estatal (y una parálisis de decadencia a veces cuando su alto protector pasa a retiro, o cae en desgracia). No todos los nuevos están aceptados por la "comunidad de negocios tradicional"; para hablar como *La Nación*, diario del *establishment*, que en un editorial reciente (18 de febrero de 1980, Edición Internacional) se interrogaba sobre estos advenedizos que "no en todos los casos representaban el mismo tipo de intereses, sensibilidad social e incluso tradición política" que los más antiguos. La reciente ola de quiebras de grandes imperios económicos después de 1979 y las dificultades financieras de algunos otros reflejan esta pugna interna ligada a apoyos estatales de tendencias militares. Buen ejemplo de ello sería la liquidación del grupo Sasstru (enero de 1981) que tuvo su hora de gloria en tiempos del general Onganía (1966-1970) y quiso romper el monopolio exportador de la tradicional (y multinacional) Bunge and Born.

Se habrá entendido fácilmente que en esta implantación del grupo dominante tenemos una de las raíces de la situación pretriorana. La guerra de todos contra todos es justamente el destino de esta flexible y omnipotente "oligarquía". Porque tiene contradicciones estructurales con todos los grupos económicos y sociales: con los productores agrarios porque está más vinculada con el comercio internacional y la determinación de precios, con los industriales no diversificados alrededor de la política monetaria, de la asignación de recursos y del carácter de la industrialización. Además, a su preeminencia se deben los rasgos actuales de la economía nacional. Una industrialización liviana de integración tardía e incompleta, vulnerable y reversible —como lo vemos hoy día—, que no puede garantizar el crecimiento autosostenido. Pero tampoco el agro lo puede garantizar donde imperan condiciones de baja productividad debido a una producción extensiva y poco capitalizada que a su vez limitan la producción industrial. Y ningún gobierno tuvo la capacidad suficiente hasta hoy para imponer una productividad mayor mediante desconcentración territorial o incentivos fiscales. Cualquier intento de fijar un impuesto a la renta potencial, como se vio en 1973-1974,³¹ es equiparado a

³¹ Véase el análisis de Ricardo Sidicaro sobre este punto (capítulo 2).

una expropiación. Y lo es en la lógica del grupo dominante porque toda inversión innecesaria congela recursos e impide su rápido traslado hacia otro tipo de actividad. El estrangulamiento cíclico produce por ende de la dominación social. El grupo agroexportador dominante se enfrenta también con los asalariados fuera del campo productivo en cuanto consumidores: no sólo porque éstos aspiran a un precio bajo de los bienes alimenticios sino porque cada aumento de consumo reduce los excedentes exportables. El aumento de la demanda interna de productos exportables con una producción estancada crea enfrentamientos insuperables. En 1900 Argentina consumía el 46% de su producción agrícola; en 1958 cerca de 80%.³² Además, mientras los sectores populares reclaman la intervención del Estado benefactor, la gran burguesía es ferocemente partidaria del liberalismo más estricto.

Este cuadro de situación configura un andamiaje económico-social al que sólo un crecimiento horizontal acelerado podía llevar a un equilibrio dinámico. En 1930 la gran depresión que desarticula los flujos del comercio mundial coincide con el fin de la expansión horizontal del país que aseguraba la estabilidad del conjunto y el funcionamiento democrático de las instituciones; por ejemplo: las superficies cultivadas, que se duplica entre 1900 y 1905 y de nuevo entre 1905 y 1911, pasan sucesivamente de 6 a 11 y luego a 21,3 millones de hectáreas, pero la progresión más lenta en los años veinte se estabiliza en 1930 alrededor de 25 millones de hectáreas, cifra más o menos estable hasta hoy.³³ Ya no hay más disponibilidad de tierras: termina también la "democracia de las vacas gordas" y el control a distancia del Estado no basta en la tormenta. El recurso a la fuerza no es dictado por imaginarias amenazas al orden o al *statu quo* sino por la necesidad de, por un lado, tener las manos libres en la utilización de los recursos y, por el otro, de echar mano a la maquinaria estatal.

A la luz de estas observaciones podemos valorar mejor los comodines a veces abstractos de la crisis de hegemonía y de la ausencia de partido conservador. Se utiliza a menudo el concepto de crisis de hegemonía para significar que el grupo o la fracción dominante no tienen ya más poder para orientar la sociedad. Si bien este grupo no tiene hoy sobre las clases medias el influjo que tuvo antes y su monopolio ideológico se ve atacado, en el caso argentino se trata de otra cosa. La concentración del poder económico y el exclusivismo social le permiten al grupo dominante "organizar el consentimiento" sobre la base de alianzas estables y permanentes, es decir de compromisos

³² ONU, *El desarrollo económico de la Argentina*, op. cit., p. 23.

³³ CERRI, *Estudio económico de la América Latina*, 1949, Nueva York, 1951, p. 136 y Guido Di Tella y Manuel Zynnelman, *Las etapas del desarrollo económico argentino*, Buenos Aires, 1967, p. 107.

claros con otros sectores sociales. Para dirigir, este grupo de corriente minoritaria alterna en confrontación con casi todos los estratos sociales internos; no puede pasar los compromisos inclusive programáticos necesarios para hegemonizar la sociedad sin perder su poder y su dominación. Por esta razón estructural entra en contradicción con el principio de un gobierno de opinión y la "ciega ley de los números". Argentina conoce así una dominación sin hegemonía por parte del grupo minoritario no permite la formación de un partido policlasista o polisectorial que responda a sus intereses.

Así una "dominación nacional de tipo embudo"⁴⁰ y la inconstancia económica de una minoría dominante versátil impidieron la formación de un partido conservador. El Partido Demócrata Progresista, fundado en 1914 por Lisandro de la Torre entre otros, para representar los grupos dominantes dentro de un partido de masas fue saboteado por los grandes estancieros de la provincia de Buenos Aires y sus adláteres porque no querían compartir nada con los representantes plebeyos de la "pampa gringa" y los sectores ganaderos y empresarios no privilegiados. No es la ausencia del partido conservador lo que explica la inestabilidad política sino que las causas de esta ausencia aclaran las rupturas.⁴¹ Rechazando cualquier elemento de rigidez económico-financiero, la fracción dominante tenía que pagar el precio de negarse a anudar alianzas con un mínimo de reciprocidad: el recurso permanente a la fuerza a través de la rama más autónoma del Estado, el ejército. Otra paradoja: el grupo antiestatista por naturaleza —a pesar de deberlo todo al Estado— va a fomentar en contra de su voluntad la expansión del aparato estatal. Es interesante notar que en otras sociedades del continente, donde existen fracciones dominantes con parecido comportamiento exclusivista y multisectorial (y donde también se habla de oligarquía), no se han podido formar partidos conservadores y la hegemonía militar es casi permanente: tal es el caso de Perú y de El Salvador.

⁴⁰ Esta expresión es de Fernando Henrique Cardoso en *Política et desenvolvimento das sociedades dependentes*, París, 1971, p. 123. Sobre la dominación social, ver también: Leopoldo Alibó, *Estado y sociedad civil: patrones de emergencia y desarrollo del estado argentino*, México, El Colegio de México, 1974, p. 30.

⁴¹ Alrededor de esta cuestión del partido conservador, surgió a principios de los años setenta un interesante debate en Buenos Aires; véase Torcuato Di Tella, "La búsqueda de la fórmula política argentina", *Desarrollo Económico*, marzo de 1972; Manuel Mora y Araujo, "Comentarios sobre la búsqueda de la fórmula política argentina", *ibid.*, octubre-diciembre de 1972; Eugenio Kvarnén, "¿Fórmula o fórmulas? Algo más sobre nuestro sistema de partidos", *ibid.*, pp. 613-628; Oscar Corbelli, "La opción conservadora en la política argentina", *Desarrollo Económico*, enero-marzo de 1975. Nos permitimos terciar en este debate con una hipótesis más.

Hegemonía sustitutiva e inestabilidad funcional

El esquema de funcionamiento de la dominación no hegemónica del grupo dominante nacional puede hacer pensar que las discontinuidades políticas resultan funcionales para su predominio. La inversión de las corrientes socioeconómicas o la mudanza en las tendencias sectoriales obstaculizan todo predominio sectorial de larga duración, algo que podría permitir la emergencia de nuevas capas dirigentes. Lo que no significa que siempre las rupturas políticas correspondan a los intereses de este grupo, y aún menos que las fuerzas armadas sean instrumento suyo sino sencillamente que su estabilidad y su estrategia económica se compaginan perfectamente con la inestabilidad del sistema. En la medida en que no puede gobernar directamente dentro del marco constitucional porque no se dieron, por las razones estructurales ya descritas, los medios pertinentes para ello, es conveniente que no deje gobernar a nadie y que subraye la incapacidad de los gobernantes y la ineficacia del sistema que su grupo logró llevar a un grado de prosperidad nunca más recuperado. La norma de ilegitimidad legítima entonces su poder social. Cuanto peor, mejor: la política del perro del hortelano descalifica lo político.

En cuanto a las fuerzas armadas, su relación con el sistema se debe ante todo a su naturaleza de rama militar del Estado identificada con él y su continuidad. El Ejército-Estado dotado de relativo margen de autonomía con relación a las clases superiores, se encuentra tangencialmente vinculado con todos los grupos "participantes". Lo que le permite a veces agregar intereses fraccionales divergentes a través de una perspectiva institucional, es decir persiguiendo objetivos profesionales. Es así como las fuerzas armadas imponen al sistema vigente, y para mejor defenderlo, las adaptaciones que les parecen necesarias en el campo económico, social y político: la neutralidad en la segunda guerra mundial o el fomento de la industria pesada en contra, en ambos casos, de los grupos dominantes, son sumamente ejemplares. Las fuerzas armadas toman a veces la defensa del *statu quo* oponiéndose a sus propios beneficiarios.

Pero también las fuerzas armadas constituyen un terreno y un objetivo de la lucha entre sectores sociales y fracciones de las capas propietarias. Frente a una sociedad fragmentada por rivalidades sectoriales y divajes que proceden de la dependencia externa, la homogeneidad institucional y el arraigo nacional de las fuerzas armadas justifican sus intervenciones. Los militares se sienten frente a las corporaciones, los grupos de interés o los partidos como "clase universal" sólo apta para resolver los conflictos internos de los grupos productores o consumidores en pugna cuando parecen, según criterios castrenses, amenazar la existencia del sistema global. Las fuerzas ar-

madras se sienten revesadas de la misión de "mantener contra viento y mareas el equilibrio colectivo" ⁴¹ porque forman la única institución nacional con la cohesión y la autoridad necesaria para sustituir temporalmente a un grupo dominante que no puede dirigir el conjunto social sin menoscabo por sus permanentes intereses. Así es como los militares desempeñan en los periodos de crisis, es decir de presiones antagonistas fuertes de diversos sectores sociales, una hegemonía burocrática de sustitución. Es decir tratan de organizar en cuanto Estado e institución coercitiva legítima el consentimiento de las capas subordinadas alrededor de algún tipo de proyecto nacional. Si miramos bien la historia argentina desde 1930, las únicas inflexiones de la evolución nacional —para bien o para mal— se deben a la intervención de las fuerzas armadas que no siempre se contentaron con restaurar las élites agroexportadoras. Lo que si parece evidente es que estas intervenciones, estos periodos de hegemonía sustitutiva y autoritaria tuvieron siempre como objetivo armonizar por la fuerza, imponiendo una única solución, la legitimidad económica y la legitimidad política. Así entre las experiencias límites de esta hegemonía militar no restauradora podemos destacar los gobiernos post 1943 y la "revolución argentina" de 1966. En el primer caso los militares intentaron superar la contradicción entre el grupo minoritario dominante y el partido mayoritario por una dictadura nacionalista de integración económica y social. En 1966 el ejército abre un proceso de modernización económica para superar, por un proyecto desarrollista, la exclusión política de los sectores sociales mayoritarios que habían la expansión del gran capital industrial.

Estos dos casos pueden aparecer como situaciones excepcionales. De modo más general las intervenciones invierten el sentido de las transferencias sectoriales, ponen término a los desequilibrios intersectoriales, restableciendo así el equilibrio de una sociedad sin hegemonía. La naturaleza, por así decirlo, multisectorial de los golpes, como procesos de redistribución política aumenta la legitimidad de la dominación casrensse. Favoreciendo alternativamente a cada sector social, y hasta los consumidores y asalariados como en 1943, las fuerzas armadas imponen un empate social que no sólo impide superar la crisis hegemónica sino que la reproduce y permite a la minoría dominante seguir cabalgando. Así el poder militar tiende a imposibilitar la preponderancia de los intereses estrictamente sectoriales. O mejor dicho se oponen a la dominación de algunos sectores sobre los demás que llevaría necesariamente a transformaciones sociales de fondo. Pero al congelar los desequilibrios sociales, motor

⁴¹ Juan Ramón Beltrán, "Misión del oficial frente a los problemas sociales contentivos", *Revista Militar*, septiembre de 1936, p. 508.

de la evolución y del progreso, estas intervenciones socialmente estabilizadoras prolongan la crisis global de la sociedad argentina y producen la inestabilidad política. Si presentamos estos mecanismos de modo bastante ahistorico, es porque su propia recurrencia y carácter cíclico les dan en sus grandes líneas una notable intangibilidad a lo largo de medio siglo. Lo que no significa que el último episodio del poder militar que se inscribe dentro de este esquema no tenga características peculiares, características estas que nos conviene ahora dilucidar a la luz de nuestra hipótesis global.

Militarismo de mercado y solución final

El derrocamiento del gobierno legal el 24 de marzo de 1976 no escapa al esquema que acabamos de trazar, si bien se complico algo. Los gobiernos peronistas después de 1973 en líneas generales favorecieron una importante transferencia sectorial desde el agro a los sectores consumidores y asalariados mediante el Estado. Pero también el peronismo, a pesar de políticas que hubieran podido favorecer el consumo industrial, se enfrentó con todo el sector empresarial argentino, siendo los grandes propietarios rurales la punta de lanza de la coalición. La radicalización de una fracción de la clase media asalariada y la movilización combativa de los trabajadores unidas al peso, especular del aparato sindical en el Estado lograron amenazar a todos los grupos propietarios, ampliando así la base de la coalición intersectorial, que la violencia guerrillera transformó en un frente contrarrevolucionario. Por una vez toda la burguesía, y las clases medias, golpeadas brutalmente por la inflación, se encontraban unidas contra el enemigo común. La disgregación del Estado populista y la pendiente de la guerra civil parecían ofrecer las condiciones adecuadas para una vuelta al orden "natural" del liberalismo reclamado por la minoría agroexportadora. Todo apuntaba a una restauración del modelo tradicional de la Argentina de principios de siglo.

Sin embargo, el pretexto de la lucha contra la guerrilla y la situación de demoralización en que se hallaba la clase obrera, lo mismo que la anestesia del sector industrial no diversificado abrieron las vías para practicar soluciones quirúrgicas con finalidades diversas. La "divina sorpresa" de la guerra contrarrevolucionaria y del fracaso populista daban una oportunidad sin precedente, lo mismo para reestructurar el mercado interno que para transformar una economía compleja y diversificada en una zona productora gozando de amplias ventajas comparativas. El retorno hacia el pasado, deseado por los sectores agrarios "puros" ⁴² y algunos altos funcionarios mi-

⁴² Véase por ejemplo las declaraciones del vicepresidente de la Confederación de

litares, no prosperó totalmente. Sólo el primer año de la nueva administración, la pauperización del sector obrero y la recesión industrial debida a la reducción del consumo, beneficiaron al sector agroexportador. La necesidad de reducir la inflación y de recomponer las reservas que resultaron en la sobrevaloración del peso y los altos intereses del crédito financiero han limitado mucho ulteriormente los incentivos y las ganancias obtenidos por el sector rural. Una política con cierta coherencia parece dibujarse y explicar el apoyo sin fisura otorgado por el sector dominante del ejército al ministro de Economía de 1976 a 1981.

Más que un intento de restauración, se trata de un proyecto de reacomodamiento de la economía adaptándola a la nueva situación del capitalismo mundial. De ninguna manera, al contrario de lo que se ha afirmado varias veces, el capital transnacional se halla beneficiado por la política de elevado costo social llevada a cabo. Más bien las multinacionales que producen para el mercado interior son igualmente víctimas de una política de desprotección industrial y de reducción del consumo. Las grandes empresas extranjeras desinvierten por ejemplo en el sector automotor o conocen ingentes pérdidas. El proyecto se apoya sobre otras fuerzas y consiste aparentemente en recuperar en el mundo de hoy con los medios industriales el provecho de las ventajas comparativas perdidas según la minoría dominante por la asincronía entre el desarrollo social y el desarrollo económico. Lo que significa latinoamericanizar las pautas del consumo popular reduciendo los costos de la mano de obra pero no a expensas del sector agrario y eliminar las empresas industriales que producen a altos precios para un mercado sobreprotegido. Esta liberalización, que necesita una fuerte dosis de coacción, debe permitir un reordenamiento del aparato productivo que corresponda una vez más a los designios de los grupos agrarios diversificados más fuertes. Los estudios de la reciente política de promoción industrial¹⁴ muestran que "el modelo implícito" es el de un país que aproveche las ventajas comparativas que dispone y simultáneamente se prepare para abrirse al mercado mundial. La agroindustria y las "industrias verdes" en general o las que permiten la valorización de la tierra y de sus posibilidades (comocelulosa y papel) son las más favorecidas: procesamiento de soya,

Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa (CABAR) sobre los valores del pasado, únicos valores nacionales, en *La Opinión*, 19-25 de junio de 1977.

¹⁴ Como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, general Saiz-Juncos que exaltaba en sus discursos en 1976 la oligarquía agraria como clase dirigente. *El Comercio a la juventud, mensaje del gobernador de Buenos Aires*, Junio, 21 de agosto de 1976, La Plata.

¹⁵ Jorge Schwarz, "Estrategia industrial y grandes empresas: el caso argentino", *Desarrollo Económico*, octubre-diciembre de 1978, p. 341.

pesca, frigoríficos, alimentación aparecen así como las producciones estimuladas por la política oficial.

Toda esta política, que sólo estimula la sustitución de importaciones en los rubros en que el país tiene condiciones eminentemente favorables que permitan ulteriormente colocar excedentes en el mercado mundial y que desindustrializa sin piedad a los demás sectores (excepto los de importancia estratégica defendidos por los militares), conforma una estrategia productiva racional en las nuevas situaciones del "desafío mundial". Pero es igualmente racional para el estrecho grupo dominante multisectorial que busca industrias con alto valor agregado y que no requieren un monto de inversión elevado. El apoyo del Estado es imprescindible evidentemente para estas actividades capitales intensivas que apuntan en la misma dirección, como es el caso de la pesca o de la celulosa y más aún en el caso de la siderurgia o de la petroquímica, que parecen también gozar de favores oficiales.

Desde el punto de vista político este proyecto, si corresponde bien a la realidad, tendría como resultado si no terminar de una vez con los enfrentamientos intersectoriales e intrasectoriales entre campo e industria, por lo menos limitar su impacto. La nueva industrialización selectiva dictada por el estado actual del mercado mundial y por los recursos más ventajosos del país contribuiría a atenuar las divergencias intersectoriales en la medida en que toda la industria sobreviviente estaría vinculada al campo o por lo menos produciendo sin necesitar enormes transferencias sectoriales. Esta especialización extrovertida podría, según sus beneficiarios y sus ejecutores, poner fin a los movimientos pendulares y asegurar un grado aceptable de estabilidad política. Lo cierto, por lo menos es que aseguraría de nuevo, como en el siglo pasado, la hegemonía sin rival de la gran burguesía importadora-exportadora pero que no permitiría la restauración de una democracia ampliada. No dejaría de abrirse otra época de vacas gordas y peones flacos.

Este modelo de crecimiento ligado a un proyecto político sin embargo no carece de precedentes. El general Onganía presidió también un intento de transformación social basado sobre un crecimiento extrovertido. En este caso, con actores distintos. La eliminación de las pequeñas empresas ineficientes, la reducción del consumo popular y los golpes asestados al sector agrario preparaban un *aggiornamento* de la sociedad argentina que reforzara el poder de grandes grupos industriales ante todo extranjeros. A largo plazo esta industrialización "a la brasileña", acelerada y dependiente, debía producir una modernización social capaz de superar la dicotomía tradicional peronismo/antiperonismo. La movilización del campo y la vinculación multisectorial del ejército o la tendencia equilibradora del me-

canismo militar terminaron en 1970 con estos sueños autoritarios y permitieron a la vez un soplo de libertad y la reanudación del ciclo civil-militar. Las circunstancias son por cierto distintas esta vez y el régimen mucho más institucionalizado como lo demuestra la bien ordenada sucesión presidencial, pero los beneficiarios casi permanentes de la inestabilidad difícilmente podrán imponer una "democracia fuerte y estable" prescindiendo de la sociedad avanzada y con-fictiva en la que se establece.

En el curso de las cuatro últimas décadas la gran burguesía agraria ha desempeñado en las relaciones políticas argentinas roles de significativa importancia. Aun cuando su gravitación fue comparativamente menor que la que tuvo en épocas históricas precedentes, ha conservado un sustancial poder de intervención en el sistema político y una fuerte presencia en la estructura económica nacional. Del estudio de la dinámica sociopolítica del período mencionado, surge que la gran burguesía agraria ha perdido la capacidad de actuar como clase dirigente del conjunto de la sociedad y ha centrado sus prácticas en el desarrollo de acciones orientadas a conservar sus fragmentadas posiciones de dominación, sus intereses y privilegios sectoriales.¹ Estas condiciones de dominación, sus intereses y privilegios sectoriales, ni una atipicidad exclusiva tipo de situaciones no son excepcionales, ni una atipicidad exclusiva del caso analizado. Corresponde a una modalidad de cambio social en la que se produce el progresivo deterioro de una fracción que había ocupado roles predominantes, sin que ello implique su desaparición de la escena política. Por otra parte, en la medida que las relaciones de poder no pueden considerarse como una ecuación de suma cero, la declinación de una fracción determinada no supone el inmediato surgimiento de sectores sociales que la replazan.² En esas condiciones se refuerza la ambigüedad de la situación de una fracción en crisis.

En este texto nos proponemos analizar los principales aspectos del proceso de crisis de la gran burguesía agraria argentina, centrándonos específicamente la atención en las características que el mismo presentó en los últimos veinticinco años.

* Sociólogo. Argentino. Investigador del Centre de Recherche sur l'Amérique Latine et le Tiers-Monde, París, Francia.

¹ Para el análisis teórico de las transformaciones de una clase dirigente véase A. Touraine, *Production de la société*, París, Seuil, 1973, cap. III. Sobre este tipo de temática en la sociología latinoamericana consultar A. Solari, F. Franco, y J. Jukowicz, *Tranformación social y desarrollo en América Latina*, México, Siglo XXI, 1976, cap. VI, pp. 119-141.

² Sobre la concepción de poder suma cero véase T. Parsons, "On the concept of political power" en *Sociological theory and modern society*, Nueva York, The Free Press of Glencoe, 1967, cap. 10 y N. Poulantzas, *Poder político y clases sociales en el estado capitalista*, México, Siglo XXI, 1969, pp. 143-146.